

CAPÍTULO IV

AVANCE SINDICAL, REPOSICIONAMIENTO DEL ESTADO Y AFIRMACIÓN DE DERECHOS LABORALES, 1930-1955

Florencia Gutiérrez

1- Presentación

En el periodo comprendido entre 1930 y 1955, el mundo del trabajo afianzó su organización sindical, fortaleció sus demandas y avanzó sustancialmente en la conquista de derechos laborales. Este proceso sostuvo una fuerte vinculación con la experiencia de la clase trabajadora y el reposicionamiento estatal en materia laboral, particularmente con el golpe de Estado de 1943 y la llegada del peronismo. En tal sentido, con el objetivo de reconocer con mayor precisión las particularidades y dinámicas de este periodo, este capítulo se subdivide en dos secciones. La primera, circunscrita al periodo 1930-1943, nos permitirá conocer el afianzamiento de la trama sindical y su proyección en términos de protesta, demandas y participación política de los trabajadores. La segunda parte, centrada en la etapa 1943-1955, explora el avance e implicancias de la sindicalización en la esfera azucarera proyectada en la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). La multiplicación de sindicatos por la veintena de ingenios en un espacio marcado por las históricas formas de resistencia, las postergadas reivindicaciones, los débiles esfuerzos organizativos y la escasa presencia de las agencias estatales, resignificó sustancialmente la experiencia de la clase trabajadora.¹

2. PRIMERA ETAPA: 1930-1943

2.1 Los trabajadores frente al Estado y la política

A comienzos de los años treinta, el mundo del trabajo fue conmovido por la crisis económica de 1929 y el golpe de Estado que, comandado por el general José F. Uriburu, derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. Los crecientes niveles de desocupación se conjugaron con fuertes medidas represivas, especialmente contra los sindicatos de orientación comunista y anarquista, y una mayor intervención del Estado en materia laboral. En el caso tucumano, el fin de la experiencia radical supuso la

¹ El aporte más sistemático y significativo sobre el mundo laboral en la década de 1930 es la tesis doctoral de María Ullivarri. En tal sentido, para este capítulo remitimos, casi exclusivamente, a su tesis doctoral y a sus numerosos artículos. Para la etapa peronista recuperamos las publicaciones de Florencia Gutiérrez.

destitución del gobernador radical José Sortheix y la llegada de Ramón Castillo quien, en un escenario signado por el desprecio a la democracia y un fuerte autoritarismo, desplegó una política laboral tendiente a lograr una mayor intervención gubernamental, particularmente, a través del Departamento Provincial de Trabajo (DPT). Si bien en la provincia la preocupación oficial por revertir la “demagogia y la política de comité” de la Unión Cívica Radical y restaurar el “orden social” alterado por el obrerismo radical no implicó los niveles de represión que sí tuvo en otros espacios –donde la militancia sindical fue sistemáticamente perseguida, encarcelada y expulsada del país–, las condiciones políticas lejos estuvieron de alentar la actividad de las organizaciones obreras. Así lo hicieron saber las autoridades del gobierno de facto cuando, a pocos días del golpe de Estado, convocaron a los dirigentes sindicales para advertirles que las demandas y acciones de los trabajadores debían ceñirse a lo “justo y prudente” y canalizarse a través del DPT.²

De esta forma, a comienzo de los años treinta, la clase trabajadora tuvo que lidiar con el fantasma del desempleo, la imposibilidad de acceder a productos de primera necesidad, la hostilidad de un gobierno autoritario y la actitud de patrones que incumplían convenios y acuerdos (disminución o retraso en el pago de los salarios, extensión de la jornada de trabajo, incumplimiento del descanso dominical, entre otras) empeorando las difíciles condiciones laborales. Frente a esta situación de crisis económica y deterioro, la histórica debilidad del DPT no pudo ser revertida y el argumento asociado a su creación por decreto y no por ley fue recuperado por la patronal para evitar el avance y la intervención estatal en la esfera laboral. Asimismo, los límites de las atribuciones de esta agencia estatal para intimar y obligar a los empresarios y propietarios de talleres a cumplir con las normas o exigir la conciliación obligatoria le restaron capacidad operativa y coactiva. Por su parte, los trabajadores miraron con recelo el pretendido accionar del Departamento, al

² *La Gaceta*, 7 de septiembre de 1930. Hacia la década de 1930, alrededor del 90% de la fuerza de trabajo estaba vinculada a la agroindustria, que también se destacaba por su inversión de capital. “Fuera de ese rubro, los oficios más numerosos eran los de la rama de la construcción –carpinteros, ladrilleros, albañiles y vidrieros–; de la alimentación –donde predominaban los panaderos, cerveceros y obreros de fábricas de dulces– y las industrias dedicadas al vestido –sastres, costureras, zapateros”. Las empresas eran más bien pequeñas, 13 trabajadores era el promedio de mano de obra contratada por establecimiento. La excepción la constituían los ingenios, los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, la Cervecería de Norte, las Bodegas Giol, El Globo, los talleres de fundición y las fábricas de cigarrillos y fósforos. En cuanto a la cantidad de establecimientos dispersos por la ciudad capital, los más numerosos eran las panaderías, las sastrerías, los talleres de compostura de calzado, las fábricas de carros y carruajes, las herrerías, las carpinterías, los talleres mecánicos, de vulcanización y compostura de máquinas. En términos globales, aproximadamente entre 80.000 y 100.000 trabajadores conformaban el mercado laboral de la provincia, cifra que incluye la llegada de miles de trabajadores temporarios, particularmente de Catamarca y Santiago del Estero, para la época de la zafra (Ullivarri, 2010, p. 52-55).

que muchas veces percibieron como una herramienta gubernamental para debilitar al sindicalismo y evitar las huelgas.

Luego de un año y medio de gobierno de facto, la vuelta a la democracia implicó en Tucumán el triunfo del partido Defensa Provincial Bandera Blanca, fuerza de raigambre conservadora y espíritu reformista, que llevó a Juan Luis Nougués a la gobernación (1932-1934). Sin embargo, el nuevo gobierno, inmerso en una grave crisis económica y un complejo escenario social, no pudo revertir el papel de DPT convertido “en una agencia de colocación y estadística destinada a trabajar para el censo de desocupados y, temporalmente, en la implementación de la ley del sábado inglés” (Ullivarri, 2013, p.164).

A mediados de la década del treinta, luego de la intervención federal que puso fin a la administración de Nougués, los radicales nuevamente asumieron el gobierno provincial. Las gestiones de Miguel Campero (1935-1938) y Miguel Critto (1938-1943) se desarrollaron en un contexto de mayor dinamismo económico, recuperación de los niveles de empleo e intenciones de fortalecer el rol tutelar del Estado en materia laboral. Sin embargo, las debilidades del DPT, especialmente la carencia de facultades administrativas para avanzar frente a la patronal, no permitieron revertir su carácter de “amigable componedor”.³ Expresión de esta limitación fueron las reiteradas inobservancias de los patrones frente a las leyes y los convenios suscritos con los trabajadores; el bajo índice de multas cobradas por infracciones; y las escasas actas labradas por las repetidas violaciones a la ley de jornada laboral o por la falta de pago en moneda nacional.

Particularmente complicado fue avanzar en el espacio azucarero, donde las tareas de inspección del Departamento se enfrentaban con la concepción privada de las relaciones laborales defendida por los empresarios, quienes también hacían valer sus vinculaciones con la clase dirigente para evitar el avance estatal. La persistencia de las proveedurías en los pueblos azucareros constituía una muestra de los incumplimientos patronales y el débil accionar del DPT, que en 1936 alegó que el endeudamiento no constituía “sino la intención de proporcionar elementos indispensables para el trabajador” y dado su arraigo era difícil de erradicarlo.⁴ En este contexto, los trabajadores denunciaron que muchas veces las relaciones políticas entre los representantes de la agencia estatal y los empresarios relajaban los controles del DPT y cuando, finalmente, se lograba avanzar e imponer multas, éstas no eran cobradas. Sin embargo, el mayor esfuerzo sindical se centró en la defensa de los derechos laborales y las

³ Anuarios Estadísticos de la Provincia de Tucumán, 1925-1943. Extraído de Ullivarri, 2013, p.167.

⁴ Memoria del Departamento Provincial de Trabajo, Tucumán, enero de 1936. Extraído de Ullivarri, 2009, p. 312.

reiteradas exigencias para que la agencia estatal garantice el cumplimiento de las leyes. En este contexto, a fines de la década del treinta, propusieron cambiar la estructura y funcionamiento del DPT, con el propósito de fortalecer sus atribuciones, en tanto las actuales no garantizaban los derechos de la clase trabajadora (Ullivarri, 2103, pp. 167-172).⁵

Como una forma de evitar la limitada intermediación del DPT, en reiteradas ocasiones los trabajadores recurrieron a la mediación directa del gobernador o el ministro de gobierno, quienes intercedieron en diversos conflictos laborales. La búsqueda de arbitraje de los funcionarios radicales frente a las demandas y huelgas obreras, las entrevistas que los trabajadores impulsaron con diputados y senadores para agilizar la legislación laboral y su presencia en la legislatura al momento de discutirse y sancionarse leyes que los involucraban, expresaron la mayor apertura del gobierno frente a los problemas obreros y la capacidad de presión y negociación de los trabajadores, lo que contribuyó al fortalecimiento de su visibilidad y legitimidad pública. Sin embargo, esta mayor apertura gubernamental también supuso límites y censuras expresados en la restricción del uso del espacio público, las detenciones de trabajadores y la prohibición de reuniones. (Ullivarri, 2013, p. 319 y Piliponsky, 2011, p. 104).

En síntesis, los primeros años de los '30 el movimiento sindical se replegó y las demandas obreras fueron rebasadas por la crisis y el aumento de la desocupación. Sin embargo, a mediados de esa década la llegada de un gobierno más receptivo a las reivindicaciones obreras e identificado con el rol tutelar del Estado, aunado al repunte económico y el fortalecimiento sindical, impulsaron a la clase trabajadora, particularmente urbana, a un mayor protagonismo cifrado en la defensa y ampliación de sus derechos laborales (aumentos salariales, cumplimiento de la ley de jornada laboral y exigencia del pago salarial en moneda, entre otros).

Al promediar la década, otra artista del creciente protagonismo de la clase trabajadora fue su capacidad de movilización y su involucramiento en la política, opción tradicionalmente resistida por las organizaciones laborales por el temor a los efectos disolventes y divisionistas que podía generar entre los trabajadores. En este sentido, nos detendremos en dos coyunturas en las

⁵ En 1937 por iniciativa del gobernador Campero se promulgó una ley sobre conciliación y arbitraje, que promovía la “amigable intervención” del DPT en los conflictos laborales. En efecto, las partes debían solicitar su mediación y acto seguido se formaría un Consejo de Conciliación con tres representantes de los obreros y tres de los patrones, presidido por el director de la agencia estatal. Sin embargo, la debilidad del Departamento persistía porque el arbitraje no era obligatorio. Landaburu, 2013, p. 236.

cuales la intervención obrera cobró particular relevancia: la de 1935-1936 – marcada por la lucha contra la Legión Cívica Argentina– y la de 1942, que alentó la participación del sindicalismo en la denominada Unión Democrática. En ambas coyunturas, las demandas y la participación obrera fueron alimentadas por los acontecimientos internacionales, especialmente, el ascenso de Hitler al poder, la Guerra Civil española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En este complejo escenario, la construcción de un campo de fuerzas marcado por el dilema fascismo–antifascismo alentó la participación obrera en defensa de la democracia y la libertad.

La llegada de Miguel Campero a la gobernación, luego de la convulsionada gestión de Juan Luis Nougués, fue conmocionada por las acciones de la Legión Cívica Argentina, que el 24 de abril de 1935 tomó por asalto un comité juvenil antifascista en la capital tucumana.⁶ Un par de meses antes, los miembros de esa organización –que hundía su acción “restauradora” en el rechazo a la apertura democrática habilitada por la Ley Sáenz Peña en 1912–⁷ promovió conferencias públicas para advertir a la ciudadanía sobre “el peligro rojo internacional”, “los males de la pasión comunista” y “la necesidad de robustecer los sentimientos de nacionalidad.” (Ullivarri, 2010, p. 195).

El repudio a la presencia y accionar de la Legión se visibilizaron a principios de 1935 cuando organizaciones políticas, culturales, obreras y estudiantiles fundaron el Comité Popular contra la Reacción, espacio donde los problemas provinciales y nacionales se vincularon y nutrieron del drama europeo, especialmente la lucha contra el fascismo.⁸ El movimiento obrero tucumano fue un actor destacado de esa movilización, que, en repudio del atentado contra el comité antifascista y en reclamo de la disolución de la Liga, declaró, en abril de ese año, una huelga general que culminó con un numeroso mitin en el centro de la ciudad (Ullivarri, 2009, p. 306). En este contexto, la Guerra Civil española profundizó los sentidos en favor de la democracia y la lucha contra el fascismo y volvió a ubicar a los trabajadores tucumanos como activos defensores de la República y en confraternidad con los proletarios

⁶ La Legión Cívica Argentina había actuado por primera vez en Tucumán en 1931, luego de la caída de Uriburu desapareció para rearmarse en 1935. “Esta organización era una de los más fieles exponentes del nacionalismo ‘armado’ de derecha que irrumpió en la década y encarnaba una propuesta antidemocrática, antiliberal y antisemita. La violencia constituía, asimismo, un repertorio de acción ya bien conocido por estos grupos de derecha, quienes habían utilizado la ‘estrategia de ganar la calle’ para preparar el ambiente necesario para la revolución de 1930.” (Ullivarri, 2010, p. 195)

⁷ La ley consagraba el voto universal, secreto, obligatorio para los varones mayores de 18 años.

⁸ Algunas de las organizaciones laborales que formaron parte del Comité fueron los sindicatos de Mozos; de Luz y Fuerza; La Fraternidad y la Unión Ferroviaria FFCC Central Argentino; de Tallistas, de Oficios Varios, de Sastres, de Albañiles y la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio.

españoles. La multiplicación de comités solidarios, colectas y actos públicos sintetizaron el combate internacional contra las “fuerzas conservadoras” y ofrecieron un espacio donde los trabajadores pudieron expresar sus propias demandas en procura de ampliar sus derechos sociales y políticos (Ullivarri, 2010, p. 211).

La segunda coyuntura a analizar nos sitúa en 1942 y se vinculó con la participación política-partidaria de los trabajadores y su involucramiento en la formación de un frente plural en defensa de la democracia. Las intenciones de mayor participación obrera en la arena política se habían manifestado en los intentos de conformar un Frente Popular en 1937, en el apoyo brindado por distintos sindicatos a las candidaturas de radicales o socialistas y en los esfuerzos de las organizaciones, cercanas al partido comunista y al partido socialista obrero, para fundar en 1939 la Alianza Obrera y Democrática y participar en las elecciones legislativas de ese año (Ullivarri, 2011 (a), p. 137). De esa forma, veremos cómo la particular coyuntura de principios de los '40, amenazada por el avance conservador, reactivó la participación política obrera.

En julio de 1940, el presidente Ricardo Ortiz, radical antipersonalista, se vio obligado a solicitar una licencia por enfermedad, motivo por el cual el vicepresidente, el conservador Ramón Castillo, asumió el poder ejecutivo nacional. Su presencia vinculada con “la acción depuradora de radicales no deseables” y el avance de los conservadores implicó el retorno de prácticas fraudulentas “y un lento proceso de recorte de las libertades civiles, que hizo cada vez más difícil la actividad sindical” (Horowitz, 2001, p. 272). Frente a esta situación, el temor de una intervención a Tucumán, gobernada por el radicalismo, y la vuelta al fraude se convirtieron en una creciente amenaza que alentó la necesidad de constituir un frente político de unidad para resistir a la “reacción conservadora” y poner fin a la falsificación electoral. En términos internacionales, la Segunda Guerra Mundial reforzó en el mapa nacional la defensa de la democracia y la abierta confrontación al avance del fascismo, banderas que los trabajadores también hicieron propias. Así, en agosto de 1941 se formó la Alianza Democrática, donde confluyeron radicales, socialistas, estudiantes y diversos gremios obreros, muchos de ellos de filiación comunista.

La celebración del 1º de mayo de 1942 expresó los anhelos y la unidad de los diversos actores en defensa de la democracia. En este contexto, uno de los oradores del acto subrayó que: “hasta aquí no se concebía que los partidos políticos, aunque democráticos, participasen de la celebración del 1º de mayo. Había entre las organizaciones obreras y los partidos políticos diferencias

insalvables. Ahora la defensa de la democracia y la libertad corresponden a todos por igual”.⁹

En el caso tucumano, la situación política se complejizó aún más con los comicios para elegir gobernador que, llevados a cabo en octubre de 1942, terminaron con la intervención del Colegio Electoral por decisión del presidente Castillo, tensión que interpeló nuevamente al movimiento obrero. En tal sentido, la Comisión Cooperadora de la CGT (representación local de la central obrera) organizó un masivo acto en defensa de la autonomía provincial y a través de un comunicado expresó “que los hombres libres no pueden ser indiferentes a las pretensiones de sectores reaccionarios que en la Nación accionan vilmente para imponer un régimen de opresión que anule la libertad y el imperio del derecho”.¹⁰

Frente al avance conservador, a través del partido demócrata nacional, en las dos elecciones de 1942 (legislativas y de gobernador), la conformación de un frente electoral plural y democrático se presentaba, cada vez con más fuerza, como una estrategia destinada a la defensa de la democracia y las instituciones liberales, empresa que se enmarcaba en el proyecto de un Frente o Unión Democrática Argentina, opositor al régimen del presidente Castillo. A principios de 1943, el Frente se estructuró como un heterogéneo movimiento conformado por radicales, comunistas, socialistas, obreros, estudiantes, comerciantes, entre otros, y tomó forma con la multiplicación de comités pro unidad cuyo objetivo final era la creación de la Unidad Democrática provincial. En palabras del dirigente de la construcción, Manuel Espinosa, el abandono de “la teoría anodina del apoliticismo” había llegado porque en “momentos tan graves como el actual los trabajadores tienen una excelente oportunidad de lograr sus reivindicaciones por medio de la lucha política.”¹¹ La Comisión Cooperadora de la CGT finalmente no participó del acto pero manifestó su adhesión a

“los nobles propósitos de colaboración para que pueda materializarse la unificación de fuerzas populares y democráticas que estén dispuestas a restablecer la verdad electoral que permita el acceso a la dirección del Estado a los representantes de las mayorías auténticas, para que aseguren el imperio de las libertades constitucionales para todos los habitantes del país, que encuadra a nuestra nación en las filas de los países que luchan contra el eje

⁹ *La Gaceta*, 3 de mayo de 1942. Extraído de Ullivarri, 2011 (a), p. 142.

¹⁰ “La posición de los trabajadores”, Nota de la CC de la CGT publicada en *La Unión*, 29 de noviembre de 1942.

¹¹ *La Unión*, 15 de febrero de 1943. Extraído de Ullivarri, 2011 (a), p. 151.

totalitario y desarrollen una política económica que asegure pan y trabajo a las masas laboriosas de la ciudad y el campo”.¹²

A nivel provincial, en febrero de 1943, la situación se complejizó por la imposibilidad de que el intervenido Colegio Electoral llegara a un acuerdo y nombrara al nuevo gobernador, situación que culminó con la intervención de todos los poderes de la provincia. Las restricciones impuestas a la actividad sindical alentaron la acción de los comités pro unidad, que encabezaron la defensa de diversas cuestiones obreras, y convirtieron al acto del 1º de mayo, convocado por la Comisión Cooperadora de la CGT, en una bandera en favor del compromiso político de los trabajadores frente a los graves problemas internacionales y la negación que los “gobiernos reaccionarios” hacían de la Constitución nacional y las leyes (Ullivarri, 2011 (a), p. 154). Sin embargo, la imposibilidad de superar las desavenencias al interior de la Unión Democrática, vinculadas a la elección de candidatos, se hicieron presentes y, finalmente, el proyecto fue interrumpido por el golpe de Estado de junio de 1943.

En síntesis, la dicotomía entre “la libertad” y “la reacción” que articulaba el pulso de la política nacional e internacional fue asumida y resignificada por la clase trabajadora tucumana quien, en procura de un espacio de inserción, se alimentó de ese lenguaje –adquirido del conflicto que dividía el mundo en dos bloques irreconciliables– y con él leyó la política y el contexto nacional (Ullivarri, 2011 (a), p. 157).

2.2 Sindicatos, central obrera y protesta en los años treinta

Avances y contrastes de la organización sindical

En Tucumán, a principios de la década de 1930, el universo sindical era complejo y diverso (Ver Tabla Nº 12 En Anexo) “Convivían gremios con tradición, como el de Panaderos, Luz y Fuerza o el de Sastres; instituciones de base nacional –Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Ferroviaria (UF), Unión Linotipistas; Mecánicos y afines (ULMA) y La Fraternidad–; sociedades de resistencia con tendencia anarquista; sindicatos autónomos como el de Mozos, Empleados de Comercio o *Chauffeurs*. Sindicatos de corte más industrial como los de Fideeros o el Sindicato de Obreros de la Industria del Dulce. Existía también una amplia gama de sindicatos por oficio como Albañiles (FORA y Autónomo), Yeseros, Carpinteros, Pintores, Zapateros o el de Oficios Varios. Estaban también organizados los vendedores de diarios y revistas y los

¹² *La Unión*, 14 de febrero de 1943.

de frutas y verduras, los obreros municipales, los trabajadores de los mataderos, los ladrilleros, los conductores de coches y carruajes, los telefónicos y las telefonistas, los trabajadores gráficos, los del Correo, los empleados del Estado, entidades sindicales femeninas como la Unión Parteras y la Sociedad de Lavanderas, Planchadoras Unidas, entre muchas otras” (Ullivarri, 2010, p. 146).

En términos de centrales obreras, la idea de conformar una organización de segundo grado, es decir, la reunión de distintos sindicatos en un espacio institucional era una aspiración común a la dirigencia obrera tucumana, en tanto la unión era un recurso clave para fortalecer el movimiento obrero y profundizar su capacidad de demanda y negociación frente a la patronal.¹³

En este contexto de aspiraciones de unidad, la década de 1930 implicó un conjunto de cambios y desafíos. A escala nacional, a fines de septiembre de 1930 se creó la Confederación General del Trabajo (CGT), resultante de la convergencia de la Unión Sindical Argentina (de tendencia sindicalista) y la Confederación Obrera Argentina (de raigambre socialista). Esta central obrera levantó la bandera de la prescindencia política, por tanto, defendió la independencia frente a los partidos y fijó límites para ocupar cargos políticos a quienes desempeñaran funciones sindicales. Al principio, la articulación de la CGT con el sindicalismo tucumano fue débil, en tanto sólo contó con la participación de dos referentes: la Unión Ferroviaria y la sección local de la Asociación de Trabajadores del Estado. A mediados de la década, el dirigente ferroviario Emilio López actuó como el representante local de la Confederación y en 1938 un dirigente tucumano ocupó, por primera vez, un lugar en el Comité Central Confederal, es decir, en el órgano de gobierno de la CGT.

En este contexto de unidad sindical, la aspiración de una central también se reactivó en Tucumán y dio lugar en 1936 a la creación de la Federación Provincial de Trabajadores (FPT), que cobijó a doce organizaciones gremiales y asumió la representación y dirección de un segmento importante del movimiento obrero tucumano.¹⁴ Sin embargo, las tensiones no tardaron en aparecer y se vincularon, especialmente, con la opción por la prescindencia (apoyada por los referentes del socialismo y los enrolados en la CGT) o el compromiso político (secundado por los dirigentes vinculados al comunismo y al socialismo obrero), cuyo objetivo era la concreción de un Frente Popular

¹³ Este anhelo se concretó con la creación en 1902 de la Federación Obrera Local (FOL) de tendencia anarquista y la Unión General de Trabajadores (UGT) fundada en 1904, nacida de un grupo de socialistas que rompieron con la FOL y de un conjunto de sindicatos autónomos. Sin embargo, sostener estas organizaciones fue una empresa difícil, la UGT desapareció en 1928 y un año después la FOL “denunció que no tenía siquiera quién cubriera los cargos en su comisión directiva” pero, aún con dificultades, logró pervivir. (Ullivarri, 2014, p. 125).

¹⁴ La Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio, los chauffeurs, los vidrieros, los obreros de la madera, las costureras, los albañiles, Luz y Fuerza, los sastres, los municipales, las artes gráficas, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

donde confluyeran las fuerzas democráticas y obreras. Esos desencuentros se expresaron en la imposibilidad de celebrar de manera conjunta el 1º de mayo, conmemoración por excelencia en el calendario del mundo del trabajo.

Siguiendo el estudio de María Ullivarri, una modificación sustancial aconteció en la Federación Provincial de Trabajadores cuando se aprobó que el mandato de los delegados sería imperativo –evitando que las decisiones tomadas por la comisión administrativa de la Federación quedaran en suspenso hasta que los distintos gremios aprobaran lo actuado– y se fijaron las cotizaciones, es decir, los aportes económicos realizados por los socios. En 1939, luego de esta reforma, el socialismo fue desplazado de la comisión administrativa. Las reivindicaciones por las que luchó la FPT representaban al arco sindical tucumano y se centraron en la lucha contra la desocupación, la reforma del Departamento Provincial de Trabajo, la observancia de la legislación obrera y la sanción de una ley de trabajo a domicilio (Ullivarri, 2014, p. 131-133). La exclusión de los gremios socialistas de la Federación no supuso su marginación del campo sindical, por el contrario, empezaron a bregar por la formación de una nueva central obrera alineada con la CGT, tarea que comenzó a partir de 1939.

La necesidad de los sindicatos tucumanos de estrechar vínculos con la Confederación, y ser respaldados por la más importante organización obrera nacional, se hizo cada vez más apremiante. Asimismo, las gestiones cegetistas para sumar al mundo obrero provincial también se intensificaron, muestra de esta intención fueron las frecuentes visitas de sus delegados y los enviados que llegaban para recabar información de los problemas obreros. En este contexto, el fortalecimiento de la presencia de la CGT coincidió con el desvanecimiento de la Federación Provincial de Trabajadores (1941), atravesada por los conflictos gremiales internos, sobre todo por los cuestionamientos provenientes del socialismo y la Confederación, y la coyuntura política internacional.¹⁵

Finalmente, en julio de 1941 se constituyó en Tucumán la Comisión Cooperadora de la CGT, cuyo objetivo era “realizar tareas de organización y propaganda” y mejorar las “condiciones morales y materiales de la clase trabajadora”. Por tanto, entre sus prioridades se encontraban “organizar a los obreros del campo y a los pequeños productores de hasta 500 surcos; vincular

¹⁵ En tal sentido, la repercusión del tratado de no agresión firmado entre la Alemania de Hitler y la URSS en 1939 y la posición de neutralidad y denuncia del imperialismo asumida por el comunismo frente a la Segunda Guerra Mundial renovó los cuestionamientos de los socialistas al interior de la FPT. En 1941, cuando el ejército alemán invadió la URSS, el comunismo abandonó la bandera del imperialismo y asumió la defensa de las democracias amenazadas por la Alemania nazi, situación que sumó un nuevo punto de tensión con la CGT que defendía una postura sustentada en la neutralidad política.

a los gremios autónomos con la Comisión Cooperadora, colaborar en el armado sindical de algunas ramas urbanas, definir acciones para combatir el agio; determinar la financiación de gastos y conseguir la reforma del DPT, tareas que, en algunos casos, ya había comenzado a realizar la Federación Provincial de Trabajadores” (Ullivarri, 2104, p. 137 y Piliponsky, 2012, p. 321).

Las tensiones que atravesaban al movimiento obrero se expresaron cabalmente en 1943 cuando la CGT se fracturó, dando lugar a la denominada CGT N° 1 (representada por los gremios tranviarios, ferroviarios y cerveceros, entre otros) y CGT N° 2 (que nucleaba a los gremios de dirección comunista, La Fraternidad, la Federación de Empleados de Comercio y Unión Obreros Municipales). Esta ruptura impactó en sindicalismo tucumano que, tensionado por el apoyo a estos nuevos agrupamientos, forjó sus nuevos alineamientos y pertenencias. Por un lado, la Unión Ferroviaria y los cerveceros adhirieron a la CGT N° 1; por otro, La Fraternidad, la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio y los azucareros, enrolados en el bloque socialista aliado a la CGT, se unieron con los sindicatos de la construcción y del vestido, liderados por el comunismo, y apoyaron a la CGT N °2 (Ullivarri, 2014, p. 140).

En este convulsionado y complejo mapa sindical, una mención aparte merecen los esfuerzos organizativos de los obreros azucareros. Como vimos en el capítulo anterior, la dificultad para fundar sindicatos en los ingenios fue una constante marcada por la resistencia de los empresarios y la debilidad del Estado para avanzar y respaldar la organización obrera. En este contexto, la aspiración de unidad gremial, como sucedía en la capital tucumana, se proyectaba como un objetivo lejano para los trabajadores azucareros. Sin embargo, en 1936 la fundación del Sindicato de Obreros de la Industria Azucarera (SOIA), con sede en Famaillá, que adhirió a la Federación Provincial de Trabajadores y a la Confederación General del Trabajo, evidenció los primeros esfuerzos organizativos de los azucareros. Meses más tarde, se creó la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (UGTIA) que, vinculada al socialismo, se propuso reunir a los sindicatos de las fábricas azucareras, es decir, aspiraba a convertirse en una organización de segundo grado. Sin embargo, la imposibilidad de multiplicar la fundación de sindicatos de base truncó el proyecto organizativo (Ullivarri, 2011 (b), p. 121 y Piliponsky, 2012, p. 321).

Finalmente, ambas entidades se unieron y decidieron conservar la denominación de UGTIA, espacio laboral que pervivió hasta 1942. “La UGTIA se mostró, desde el inicio, reticente a declarar huelgas o a realizar acciones directas”, esta postura impidió superar las demandas y reivindicaciones que irrumpían en las distintas fábricas y, por ende, estuvo “muy lejos de dar forma a

un convenio colectivo que transformara de cuajo las relaciones laborales en la industria” (Ullivarri, 2011 (b), p. 125). Más allá de las limitaciones, la clase obrera azucarera empezó a forjar una experiencia organizativa que implicó el desarrollo de prácticas sindicales (reuniones con los dirigentes de la FPT, canalización de las demandas a través de los delegados de la central obrera, mayor conocimiento de la legislación laboral) que, sin duda, influyeron en la posterior creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) en 1944. Asimismo, las frustraciones e imposibilidades de la UGTIA acrecentaron las expectativas y anhelos reivindicativos de los trabajadores, que el gobierno emanado del golpe de Estado de 1943 supo capitalizar.

La protesta azucarera, vinculada con las limitaciones de la organización sindical y el control empresarial, generó medidas de fuerza esporádicas y circunscritas a una fábrica. Sin embargo, la plaga del carbón que asoló los cañaverales a principios de los años cuarenta, afectando el 30% del área cultivada, empeoró las condiciones de trabajo (el reducido tamaño de la caña, afectada por la plaga, obligaba a los obreros a trabajar más para alcanzar una tonelada de materia prima) y aumentó la desocupación. El clima político no era alentador, la asunción de Castillo como presidente de la nación, en 1941, llegó acompañada de medidas coactivas y restrictivas hacia el sindicalismo.

Sin embargo, la incipiente presencia del comunismo en la disputada zona azucarera, la que contaba con el más numeroso contingente laboral, logró concretarse con la fundación de un sindicato en el ingenio San Pablo (Obanta), que adhirió a la Federación Obrera de la Alimentación (FOA) de tendencia comunista. La represión patronal no tardó en llegar, quien como escarmiento despidió a dos dirigentes obreros. En respuesta, los obreros declararon una huelga que sólo fue acatada en algunas colonias y no logró el respaldo de los obreros de fábrica. “A diferencia de la UGTIA, el novel sindicato comunista era una organización de empresa. Tenía, por eso mismo, una actuación limitada a la esfera del ingenio y una patronal visible a quien enfrentar” y de la que esperar represalias (Ullivarri, 2011 (b), p. 130). Advertida de la situación, la FOA envió a un delegado a la provincia, quien no pudo obtener el respaldo de la CGT, ni de la UGTIA, ambas de mayoría socialista, y así lo hicieron saber a través de un comunicado que señalaba:

“el sindicato Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera, con sede en Famaillá y la Comisión Cooperadora de la CGT no han autorizado la constitución de un sindicato en Obanta y desconoce sus resoluciones por cuanto las aspiraciones de los trabajadores del campo ya fueron seria y responsablemente

concretadas en el memorial elevado oportunamente al Poder Ejecutivo de la provincia, a la CGT, a los distintos bloques parlamentarios de la Nación y a la Comisión Investigadora de la Industria Azucarera”.¹⁶

Esta negativa no impidió que el delegado de FOA capitalizara su visita a Tucumán e intentara promover la fundación de sindicatos azucareros con la aspiración de forjar una organización que pudiera disputarle a la UGTIA su influencia en el universo agroindustrial. Más allá de algunos esfuerzos organizativos (La Reducción, Monteros, San Juan y Lules), el anhelo de una federación azucarera recién se concretó en junio de 1944 con la multiplicación de sindicatos de base que confluyeron en la fundación de FOTIA.

En síntesis, las diversas coyunturas políticas y económicas de los años treinta y la organización sindical, sus fortalezas urbanas y su debilidad en los espacios rurales, resultan elementos clave para comprender las formas y ritmos de la protesta obrera. En tal sentido, en el siguiente apartado recuperamos los más destacados repertorios de confrontación que tuvieron a los trabajadores como protagonistas.

Movilizaciones y huelgas

A principios de la década de 1930, los niveles de desocupación marginaron del mercado laboral a miles de trabajadores y los que pudieron permanecer en él tuvieron que lidiar con una sobreoferta de brazos que incidió en la baja de salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales. En este escenario, como fue analizado por María Ullivarri, el mitin obrero de abril de 1931 –convocado por el sindicato autónomo de obreros albañiles y anexos, para protestar contra la desocupación– expresó la agobiante crisis económica y sus repercusiones en el mundo laboral tucumano. A través de un manifiesto, el sindicato convocó a la unión de todos los trabajadores porque “el obrero ocupado hoy en los lugares de trabajo es el candidato a desocupado mañana. El explotador le impondrá la rebaja de los salarios, le exigirá mayor rendimiento en el trabajo [...] amenazándolo con su reemplazo por un hambriento o ya desocupado que se ve en la necesidad de trabajar por lo que le den”.¹⁷

Las reivindicaciones se vincularon, por un lado, con el problema de la desocupación y, en tal dirección, exigieron el pago de un subsidio diario a

¹⁶ Comunicado de la Comisión Cooperadora de la CGT, *La Unión*, 29 de agosto de 1942. Citado en Ullivarri, 2011 (b), p. 131.

¹⁷ Manifiesto del Sindicato de Albañiles invitando al mitin. *La Gaceta*, Tucumán, 5 de abril de 1931. Citado en Ullivarri, 2008-2009, p. 181.

quienes no tuvieran trabajo; la reducción de la jornada laboral como una forma de aumentar la demanda de empleo y pasajes gratis a quienes necesitaran trasladarse a otros lugares para buscar trabajo. Por otro lado, demandaron la libertad de prensa obrera y de huelga, la libertad de presos por cuestiones sociales y el levantamiento del estado de sitio, reclamos estrechamente vinculados con las medidas autoritarias impuestas por el gobierno de facto. En estas consignas el directo interpelado fue el gobierno, a quien también le reclamaron por el incumplimiento de las leyes obreras y el débil papel del Departamento Provincial de Trabajo. Aunque en sus discursos los obreros evidenciaron las escasas expectativas frente a la respuesta que podían esperar del poder político, “en un contexto como el de esos años, salir a la calle, exponerse en el espacio público y demandar, era ya un acto político y era también una acción de protesta que daba cuenta de los efectos más mediatos de esa experiencia de explotación” que unía a los trabajadores, más allá de su condición de empleados o desocupados (Ullivarri, 2008-2009, p. 189).

En un contexto signado por la desocupación, la crisis y las medidas represivas del gobierno, el 1º de febrero de 1932 la Federación Obrera Local Tucumana (FOLT) declaró una huelga en solidaridad con la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) que, con sede en la Capital Federal, reclamaba por las detenciones y deportaciones de obreros y estudiantes. La tranquilidad con que se desarrolló la huelga por la mañana fue alterada en horas de la tarde con el allanamiento policial al local de la FOLT y la detención de un numeroso grupo de trabajadores. Este hecho desencadenó la solidaridad obrera expresada en la declaración de una huelga que, impulsada por numerosos sindicatos, se extendería hasta la tarde del día siguiente. Por la mañana del día 2 de febrero, la violencia se apoderó de las calles de la capital, los blancos fueron múltiples y diversos: mercados, farmacias, almacenes, ferias pero también confiterías, comercios, casas de tolerancia, vehículos y el propio consulado italiano “que no sólo representaba al régimen fascista sino que también era el destino de la mayoría de los deportados” (Ullivarri, 2010, p. 110). Por la tarde, la intervención del ejército se concentró en la clausura de locales y múltiples detenciones. Por su parte, los sindicatos decidieron levantar la medida de fuerza “pero haciendo constar que las causas que motivaron la declaración de la huelga, lejos de desaparecer se han reagravado”. Poco a poco, la ciudad recuperó la calma.

Como lo señaló Ullivarri, la coyuntura política en la que se desarrolló la huelga, es decir, el ocaso del gobierno de facto y las febriles negociaciones que se llevaron a cabo en el Colegio Electoral para decidir quién asumiría la gobernación, arrojan luz para entender la protesta obrera. La puja entre Adolfo Piossek (partido demócrata) y Juan Luis Nougués (partido bandera blanca) era

pareja y los votos del socialismo resultaban claves para desequilibrar la balanza y definir el triunfo. En este contexto, la preocupación por el bienestar obrero se convirtió en un argumento clave para atraer los votos socialistas. Para los trabajadores, la vuelta a la democracia y las expectativas generadas por el debate de la cuestión obrera en la esfera pública alimentaron tibias aspiraciones de mejorar su situación laboral. Asimismo, ese particular momento de transición política, marcado por una relajación de los niveles de represión, pero alimentado por la censura, las detenciones y las deportaciones, seguramente contribuyó a la contenida explosión del malestar popular.

La recuperación económica, visible particularmente a mediados de los años treinta, volvió a quebrarse a principios de los cuarenta, cuando las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, expresadas en la desocupación y la carestía, se potenciaron con las medidas represivas asumidas por el presidente Ramón Castillo, particularmente contra el sindicalismo. En este contexto, tuvo lugar la huelga del sindicato de obreros cerveceros, declarada en abril de 1940 como respuesta a la cesantía de un empleado de la fábrica, motivo al que se sumó la exigencia de cumplimiento del pliego de condiciones de 1938 y el reconocimiento de la Asociación de Empleados de la Cervecería Norte como una sección del sindicato obrero. La inacción del DPT se conjugó con el endurecimiento de la postura de la patronal que despidió a 15 empleados, situación que promovió la solidaridad obrera y que generó medidas contra los trabajadores.

Luego de 20 días de paralización de las actividades, los huelguistas reivindicaron el derecho de agremiación, la defensa de conquistas laborales amenazadas y buscaron la mediación del gobernador Critto. La magnitud y fortalecimiento del conflicto a través de su nacionalización (con la intervención del Departamento Nacional de Trabajo, la Federación Nacional de Obreros Cerveceros y la CGT) culminó con el reintegro de los trabajadores cesanteados y la aceptación de que los empleados no formarían parte del sindicato obrero. Este conflicto desnudó el mundo de jerarquías socio-laborales propias del avance industrializador, es decir, la forma en que los oficios y profesiones generaron desigualdades que difícilmente podían amalgamarse en un mismo espacio gremial (algunos empleados señalaron “que no querían ver su jerarquía de empleados manoseada por analfabetos”) y la reticente mirada de la patronal frente a la posibilidad de agremiación conjunta, la que consideraban incompatible con las tareas de vigilancia que los empleados debían cumplir en la fábrica. Asimismo, la huelga expuso la “convicción de que era prioritario extender la sindicalización y la necesidad de articular más sólidamente la unidad cerrando filas con la que, en ese momento, era la organización más

importante de los trabajadores argentinos, la CGT, quedó definitivamente planteada” (Ullivarri, 2010, pp. 242-246).

Una mención aparte merecen las luchas de las costureras, particularmente importantes en las coyunturas de 1936 y 1942. El trabajo de costura podía desarrollarse en talleres o en el propio domicilio de las mujeres, en este último caso los propietarios de registros encargaban las prendas a confeccionar y hacían de intermediarios entre los patrones y las trabajadoras a domicilio. En tal sentido, muchas mujeres realizaban el trabajo en sus hogares, allí costuraban y confeccionaban prendas a lo largo de una ilimitada jornada de trabajo, que alternaban con la realización de tareas domésticas. Los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales (pequeñas y precarias viviendas, escasez de luz y ventilación) perjudicaban su salud y volvían difícil su supervivencia.

En Tucumán la organización gremial de las costureras comenzó a principios de siglo pero su derrotero fue intermitente. En 1936, alentadas por el socialismo y la Sociedad de Resistencia de Sastres, formaron la Sociedad de Obreras Costureras de Confección en General y presentaron un pliego de mejoras que la patronal rechazó. La medida de fuerza fue iniciada por las costureras a domicilio, quienes pretendían que el precio de sus prendas se equiparase con el pagado en los talleres (Ben Altabef y Landaburu, 1995). El rechazo de las demandas, particularmente por los propietarios de registros, generó un amplio movimiento de solidaridad expresado en la declaración de una huelga general que, comandada por el Comité de Relaciones Solidarias (agrupación de diversos sindicatos y organizaciones de la provincia), se concretó el 9 de mayo de 1936. Con la intervención del DPT, los patrones firmaron el pliego de condiciones pero su cumplimiento fue prácticamente nulo. La negativa a pagar los precios acordados para cada prenda y la dificultad de la agencia estatal de comprobar las infracciones, en tanto muchas veces las mujeres no denunciaban a sus patrones para conservar el trabajo, concluyeron con la inobservancia de lo acordado (Ullivarri, 2010, p. 263-265).

A principios de los años cuarenta una nueva ley de trabajo a domicilio, que modificó la vigente desde 1918, supuso un avance en términos de los derechos de este vulnerable segmento laboral. La ley fue reglamentada por la Legislatura tucumana en 1942, proceso alentado por la Sociedad de Obreras Costureras de Confección en General y el Sindicato de Costureras creado en 1938 por iniciativa del Secretariado Social de la Acción Católica. La ley propiciaba los acuerdos salariales entre las partes y así fue que ese mismo año se formó una comisión para tratar el aumento de las prendas solicitado por las costureras. Sin embargo, las negociaciones fueron interrumpidas por la rotunda

negativa de la patronal frente a las demandas obreras, situación que llevó a las Sociedades de costureras y sastres a declarar una huelga por tiempo indeterminado. La postura del sindicato católico fue ambigua, mientras “desde la práctica habían decidido no trabajar; desde el discurso sus dirigentes y representantes dejaban clara su disconformidad con las acciones de protesta” (Ullivarri, 2010, p. 267).

Luego de que las partes alcanzaran un acuerdo y las costureras levantaran la huelga, los patrones decidieron no cumplir con lo pactado y los talleres de confección y los registros decretaron un *lock out* (cierre de la fábrica o taller por la patronal). La prolongación de la medida dejó al descubierto las tensiones y disímiles posicionamientos de las costureras, mientras algunas se mostraban más proclives a la negociación y aceptación de las tarifas ofrecidas, especialmente las católicas, las mujeres organizadas en la Sociedad persistieron en el reclamo y decidieron no entregar las prendas que tenían en su poder.

La protesta estuvo marcada por cuestiones de género, especialmente en el discurso de la prensa y de los grupos católicos, que subrayaban la indefensión y condición de madre de la mujer obrera. Para estos actores la huelga era una “necesidad imperiosa” por los bajos salarios pero debía solucionarse pronto porque existía “el agravante de que la mayoría de las costureras son madres de dos o tres hijos y su único recurso es el trabajo que realizan”. Como contrapunto, para las obreras de la Sociedad la asociación con la figura de “madres desesperadas” no era una estrategia de fortalecimiento en un conflicto gremial, sino una herramienta para “distraer su posición de clase”. Por tanto, en su discurso recuperaron sus experiencias de explotación (Ullivarri, 2010, pp. 269-272). Finalmente, luego de varios meses de gran conflictividad, con la mediación del gobernador, el ministro de gobierno y las autoridades del DPT, en enero de 1943 se logró alcanzar un acuerdo y las costureras volvieron a trabajar.

Por último, es necesario recuperar la particular dinámica del mundo laboral azucarero que, a diferencia del periodo anterior, no registró protestas generalizadas como las de 1904 y 1923. En esta situación influyó el posicionamiento de la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (1936-1942), caracterizada por su negativa a declarar huelgas o realizar acciones directas y la imposibilidad de articular una organización de segundo grado, en tanto la multiplicación de sindicatos por los ingenios no se concretó. Por otro lado, la persistencia de la concepción privada de las relaciones laborales defendida por los empresarios azucareros y las medidas coactivas – como el despido a los obreros que lideraban los intentos de organización y protesta– seguramente incidieron en la dinámica del universo agroindustrial.

Asimismo, la debilidad y limitaciones de las agencias del Estado para controlar las condiciones laborales y exigir el cumplimiento de las exiguas leyes sociales influyeron en la capacidad de negociación de los trabajadores azucareros, situación que en determinadas coyunturas se complejizó por el accionar represivo estatal (allanamiento de locales, detenciones).

Sin embargo, la ausencia de extendidas huelgas azucareras en los años treinta, no supone imaginar un escenario donde el conflicto estuvo ausente. Más bien, implica pensar en las múltiples formas en que se manifestó la conflictividad laboral, en las diversas estrategias de resistencia articuladas por los obreros, más allá del paro de actividades destinado a involucrar a numerosas fábricas. Por ejemplo, en notas enviadas a la prensa, los trabajadores no sólo exponían las situaciones de injusticia y arbitrariedad vividas en los ingenios, sino que su publicidad constituía una forma de denuncia que muchas veces no encontraba otra vía de canalizarse. Este fue el caso de los obreros del San Juan en 1931, quienes acusaron a los capataces y mayordomos por obligarlos a:

“sacar las mercaderías pagando dos veces lo que valen, porque si no nos hechan (*sic*), aprovechan la primer oportunidad que se les presenta para violar nuestros hogares, llegando casos que [...] han pretendido hasta abusar de nuestras mujeres o hijas y, el que reclama, a la calle como ellos dicen, el administrador a quien lo compadrecan (diciéndole niño Ramoncito), les permite todos esos abusos porque él también es igual que ellos, un perverso cargado con plata y nada más”.¹⁸

Asimismo, de forma cotidiana y anónima, los obreros desplegaron repertorios de resistencia (robos, quema de cañaverales, sabotajes) y, en otras ocasiones, amenazaron con huelgas o llegaron a declararlas. Así sucedió en 1935 cuando los trabajadores del Nueva Baviera amenazaron con paralizar las actividades por los excesivos precios de los productos de las proveedurías y la misma estrategia utilizaron sus pares del Trinidad para que la patronal abone los salarios en moneda nacional y cumpla con la ley de asistencia médica. Ese mismo año, el caso de La Fronterita fue distinto porque allí sí lograron declarar una huelga que promovió la mediación de los funcionarios del DPT. Otra de las huelgas parciales fue la declarada en 1942 por el sindicato del ingenio San Pablo (Obanta) pero sólo logró la adhesión de los obreros de surco, en tanto los de fábrica no se plegaron a la medida que rápidamente fue desarticulada (Ullivarri, 2011 (b), p. 118-119). Este escenario cambiaría sustancialmente con

¹⁸ *El Orden*, 29 de abril de 1931. Citado en Ullivarri, 2011 (b), p. 111.

la multiplicación de sindicatos de base y la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

3. SEGUNDA ETAPA: 1943-1955

3.1. La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA): la resignificación de la experiencia de los trabajadores

Entre 1943 –con el derrocamiento del presidente Ramón Castillo, y el golpe de Estado de 1955 que puso fin a la primera década peronista–, el avance del proceso de sindicalización y el nuevo posicionamiento del Estado frente a la cuestión obrera resignificaron las experiencias organizativas y negociadoras de la clase trabajadora argentina. En octubre de 1943, la designación de Juan Domingo Perón en el Departamento Nacional de Trabajo (convertido en noviembre de ese año en Secretaría de Trabajo y Previsión) implicó un viraje frente a la cuestión social. Perón sostenía que la organización de la clase obrera, a través de sindicatos, y la mediación estatal en los conflictos entre el capital y el trabajo constituían la herramienta más efectiva contra la agudización de la lucha de clases que amenazaba con erosionar el orden social.

La sindicalización se estructuró por actividad económica (no por oficio o empresa) y el Estado otorgó a un sindicato el reconocimiento para negociar con la patronal. De esta forma, “los empleadores estaban obligados por ley a negociar con el sindicato reconocido, y los salarios y condiciones establecidos en esa negociación se aplicaban a todos los obreros de esa industria, con prescindencia de que estuvieran agremiados o no” (James, 2005, p. 23). En este contexto, el decidido apoyo brindado a la sindicalización y la transformación del rol del Estado “como una instancia política a la que podían recurrir los trabajadores para equilibrar las relaciones de fuerza en el mercado de trabajo” modificaron la dinámica del mundo del trabajo (Doyon, 2002, p. 363).

En Tucumán, el flamante director del Departamento Provincial de Trabajo (DPT), el abogado Carlos Aguilar –militante del nacionalismo católico e identificado con la Doctrina Social de la Iglesia– alentó desde fines de 1943 la formación de sindicatos por ingenio. En su primera entrevista con el interventor provincial Carlos Baldrich (1943), Aguilar expuso el norte de su gestión: “promover oficialmente la agremiación en todas las actividades y acordarles una legitimidad provisoria [...] y acentuar esta tarea en la rama azucarera”, donde las condiciones gremiales y laborales eran “pavorosas”.¹⁹ Estos desafíos suponían revertir el débil accionar del DPT que, en palabras del Director, circunscribía sus funciones a una “agencia de colocación”, e implicaba desarticular los cuestionamientos y resistencias, especialmente de los

¹⁹ Archivo Privado Ana María Aguilar, Testimonio de Carlos Aguilar sobre el gremialismo y el nacimiento de FOTIA, 1988.

industriales azucareros, a su intervención en los conflictos laborales y el control de la incipiente legislación social. Esta empresa, que Aguilar asumió como propia, logró concretar lo que hasta ese momento era una quimera, es decir, la fundación de sindicatos por la veintena de ingenios y su proyección en una organización de segundo grado, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), creada en junio de 1944 y convertida en el sindicato más importante del norte argentino durante el primer peronismo.

La conformación del nuevo espacio asociativo sustentado en la organización de “sindicatos de asalariados de la industria azucarera” modeló la estructura descentralizada adoptada por la Federación, fisonomía que condicionó la relación de la dirigencia con las bases y la dinámica de la protesta obrera durante el primer peronismo. La FOTIA nucleaba, con gran margen de autonomía, a los sindicatos obreros de fábrica y surco, que se comprometían a “darse la forma de organización que sin discrepar [con el estatuto general], consulte las modalidades de sus respectivas organizaciones o responda más satisfactoriamente a sus intereses”.

El estatuto concedía a los sindicatos completa libertad para decidir sobre múltiples cuestiones como las relacionadas con la disciplina de sus asociados, el manejo de la caja social y la libre disposición de sus fondos, la elección de su delegado al Consejo Federal y la reforma de su normativa interna. Además, cada sindicato tenía autonomía para declarar la huelga gremial “en tanto que ella se desenvuelva en los límites de su oficio ejercido a través de un Comité de Huelga” e informe a FOTIA “de las gestiones preliminares a la lucha”. La huelga general era una prerrogativa del Consejo Federal, conformado por los delegados de los sindicatos o aquellos elegidos por mayoría en las asambleas de sus respectivos gremios.²⁰

A los pocos meses de su conformación, en agosto de 1944, FOTIA presentó al Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (DRSTyP) un pliego en el que reclamaba una suba salarial “que de lugar al verdadero escalafón para las distintas calificaciones de obreros que colaboran en la industria azucarera y tareas de su extensión” y el cumplimiento de “igual remuneración por igual trabajo”. De esta forma, la Federación demandaba un 20% de aumento salarial para los obreros y precisaba un total de 101 categorías laborales (54 de fábrica y 47 de cultivo) con su correlato salarial. Asimismo, reclamaba la implementación de políticas sociales destinadas a

²⁰ Schleh, Emilio: *Compilación legal*, t. XI, pp. 193-195.

garantizar “estabilidad, vivienda, jubilaciones y socorro” a los trabajadores azucareros.²¹

A fines de agosto, los sindicatos de doce ingenios se declararon en huelga para exigir el cumplimiento del pliego presentado. Los dirigentes de FOTIA advirtieron a las autoridades provinciales que el paro no había sido ordenado, ni dirigido por ellos, sino que surgió “de grupos obreros aislados” como “reacción contra la demora” de los industriales en el cumplimiento de las aspiraciones obreras. El desconocimiento de la medida de fuerza por FOTIA inauguraba una práctica que se tornaría en común denominador hasta 1949: el desborde permanente de las bases frente a la dirigencia sindical, comportamiento que impulsó al Estado provincial y nacional a instrumentar canales de negociación y arbitraje que, con frecuencia, también fueron desconocidos por los sindicatos.

A lo largo de la primera década peronista, los decretos nacionales que regularon el mundo laboral azucarero e impulsaron inéditos derechos laborales que, aunados a la multiplicación de sindicatos de base y la creación de FOTIA, generaron un cambio sustantivo en las relaciones entre el capital y el trabajo. Estos decretos, equiparables con los convenios colectivos, redefinieron “las relaciones de autoridad en las empresas, al establecer una instancia por encima de los patrones, a la que los trabajadores podían apelar” (Torre, 1990, pp. 89-90). En el caso agroindustrial, los decretos impulsaron y profundizaron la legislación socio-laboral y restringieron la casi omnipresente autoridad de la patronal sobre los obreros. En este contexto, la presencia reguladora del Estado nacional y su intención de brindar soluciones a la agroindustria quedó plasmada en el decreto N° 678, promulgado en 1945 (Bravo y Gutiérrez, 2014). Una de las novedades de este decreto fue la fijación del escalafón azucarero, es decir, el reconocimiento de 112 categorías ocupacionales (62 oficios de fábrica y 50 tareas de surco), medida que satisfacía un reclamo central del petitorio fotiano de 1944. (Ver Tabla N° 13 en Anexo)

El escalafón remitía a una compleja gama de categorías socio-ocupacionales que, al clasificar y organizar el trabajo en las fábricas y cañaverales, se convirtió en un recurso para menoscabar las facultades de los industriales en términos de contratación, despido y promoción del personal. Estas categorías forjaron un instrumento de negociación sindical que impidió a los industriales “administrar la fuerza de trabajo como una masa relativamente indiferenciada”, en tanto otorgaban una “pauta predecible de ascenso”. En

²¹ Schleh, Emilio: *Compilación legal*, t. XI, p. 266. El documento exigía el cumplimiento de la ley de maternidad, el pago de salario familiar –estipulado a cada hijo de obrero menor de 14 años–, y el libre acceso de los comerciantes a los ingenios.

efecto, frente a una eventual vacante, la patronal estaba obligada a privilegiar el ascenso del trabajador que ocupaba la categoría inmediatamente inferior. Por su parte, el obrero que era asignado en una categoría superior, a fin de cubrir una vacante, tenía derecho a percibir el salario de esa calificación y debía ser reasignado en un plazo no mayor de dos meses; si la transferencia era a un nivel inferior el salario no podía disminuirse (Doyon, 2006, p. 287).

La implementación del escalafón azucarero, que con el correr de los años amplió las categorías ocupacionales hasta llegar a más de 400, generó un campo de fuerza tensionado por las demandas de los sindicatos de base, las resistencias de la patronal, la intervención de las agencias estatales (especialmente la DRSTyP) y las presiones ejercidas por FOTIA para que el Estado nacional profundice, a través de decretos, las escalas laborales. Así, la instrumentación de estas categorías ocupacionales, implicaron un proceso de reivindicaciones e instancias de negociación que oscilaron entre la abierta confrontación huelguística, los acuerdos formales devenidos de la presentación de petitorios obreros y la progresiva profundización de las clasificaciones reconocidas por los decretos (Gutiérrez, 2014).

La complejidad y precisión con que fueron definidos los oficios y las tareas agrícolas azucareras fue capitalizada por los dirigentes sindicales, quienes exigieron el cumplimiento del mayor número de “escalas” con el propósito de incrementar los niveles salariales y de empleo. En este contexto de aspiraciones obreras, los sindicatos bregaron por la constante revisión y observancia del escalafón. De esta forma, irrumpieron una serie de reclamos que pretendían incidir en la organización de los procesos laborales y en la contratación o reubicación del personal, consideradas hasta ese momento como incuestionables prerrogativas patronales.

Así, en noviembre de 1945 los obreros del ingenio Amalia pararon sus actividades por considerar “inadecuada” la forma en que se realizaba el cultivo de caña. La falta de un acuerdo entre las partes impulsó a la DRSTyP a solicitar la intervención de un “técnico”, quien determinaría la “clase y precio de los trabajos” realizados.²² En la misma fecha el sindicato del Concepción emplazó a la patronal para que reconsidere la forma en que se realizaban las reparaciones en la fábrica. En septiembre de 1948 los “obreros del ingenio San José, los representantes de FOTIA y la patronal celebraron una prolongada entrevista en la DRSTyP conviniéndose un acuerdo” que entre otros aspectos precisaba la forma en que debían realizarse los trabajos de cultivo.²³ En septiembre de 1948 los propietarios del San Juan acordaron con el sindicato el

²² *La Industria Azucarera*, nº 625, noviembre de 1945, p.639.

²³ *Trópico*, 4 de septiembre de 1948.

ascenso de diversos obreros. Entre otros beneficiados, el convenio precisaba “ascender de medio oficiales maestros de azúcar a Roque Soria, Carlos Gramajo e Isidro Concepción, quienes pasan a revestir en la categoría de maestros de azúcar de 2ª categoría”.²⁴

El reconocimiento de categorías ocupacionales también operó como trampolín para acceder a los derechos laborales. Al calor de la nueva sensibilidad obrera del gobierno y al ritmo de las protestas, el Estado nacional modeló los alcances del sujeto de derecho del mundo azucarero: el obrero permanente. En 1946 un decreto definió las cualidades para acceder a esta categoría: acreditar una actividad anual continuada en fábrica o surco, contar con una antigüedad laboral de quince años y, en caso de trabajar en los ingenios, revestir la categoría de medio oficial en adelante. En síntesis, era el trabajador permanente quien podía acceder a determinados derechos como el acceso a la mensualización, el incremento salarial con base en la antigüedad y el salario familiar. Por ende, las reiteradas aspiraciones obreras vinculadas al escalafón y destinadas a alcanzar la categoría de medio oficial no pueden desvincularse de la aspiración por conquistar estos derechos (Gutiérrez, 2016).

En síntesis, el escalafón impulsó la redistribución del poder fabril, interpeló la autoridad y atribuciones de los empresarios y modificó la frontera de aquello que los trabajadores podían discutir con los industriales. Paros, petitorios e instancias de conciliación se conjugaron de forma desigual y desordenada para avanzar en el cumplimiento del escalafón. Desde 1945, la paralización de las actividades productivas, como forma de exigir la implementación de ascensos o reubicaciones, intentó ser canalizada a través de instancias “orgánicas y formales” alentadas por la DRSTyP, las autoridades provinciales y nacionales y la dirigencia fotiana. Sin embargo, la explosión de reivindicaciones obreras y el impulso herético del peronismo promovieron gran cantidad de huelgas erosionando, en gran medida, los canales oficiales de conciliación (Gutiérrez, 2015).²⁵

Asimismo, amparados en la facultad de declarar la huelga gremial, entre 1945 y 1949 los sindicatos de base procuraron la remoción de la jerarquía fabril (administradores, jefes de fabricación o de cultivo, capataces, entre otros), quienes actuaban como agentes patronales encargados de controlar los procesos laborales e imponer los ritmos productivos. Al igual que el escalafón,

²⁴ *Trópico*, 7 de septiembre de 1948.

²⁵ El parteaguas en lo relativo al escalafón llegó con un decreto de febrero de 1949, al precisar que era facultad privativa de la administración de los ingenios “la organización del trabajo y la designación de su personal” y que la planilla de calificación era “enunciativa y al solo efecto de establecer los salarios que corresponden a cada categoría”. Con la promulgación de este decreto las arduas negociaciones sindicales en favor de la aplicación y avance del escalafón encontraron su límite, en tanto el carácter “indicativo” de la planilla cercenó la capacidad de negociación obrera.

estas demandas expresaron la pretensión de los sindicatos de intervenir en una esfera de competencias, hasta ese momento, estrictamente patronal.

Podemos pensar que la “coyuntura de oportunidades” marcada por las expectativas de éxito de las medidas de fuerza; la tradición de resistencia de los obreros azucareros y sus postergadas reivindicaciones y la profundización de la organización sindical alentaron la declaración de huelgas e introdujeron esta inédita causa de paralización de las actividades: el trato “desmedido” o “desconsiderado” que los administradores y personal jerárquico dispensaban a los obreros y, por ende, el reclamo para exigir el despido de estos “estrechos colaboradores” de los industriales.

Así en noviembre de 1945, el sindicato de obreros de La Trinidad se declaró en huelga para pedir la reincorporación de Simón Salguero y la separación o traslado del administrador, Luis Gallardo. Ese mismo año, obreros del ingenio San José exigieron la “exoneración” del jefe de fabricación y de cultivo, a quien acusaron de actuar de forma contraria a los intereses gremiales.²⁶ El sindicato del ingenio Amalia solicitó en 1946 el alejamiento del jefe mecánico Antonio Stoopman por su “trato desconsiderado, violento en sus contestaciones, procaz en sus reprensiones” y por atacar en forma “sistemática a los dirigentes del sindicato obrero”.²⁷ En 1948 el del Mercedes recordaba que en el ‘45 había solicitado el despido del administrador, Rodolfo Moisés, y del contador, Lino Escobar, “por la manera brutal, desconsiderada e inhumana con que trataban a los obreros y empleados”.²⁸ (Gutiérrez, 2014).

El avance de los sindicatos de base impugnó la autoridad empresarial en los ingenios pero también interpeló al gobierno peronista, obligado a contener los desbordes de la ofensiva obrera y precisar los “sentidos de los límites” que él mismo había ayudado a subvertir. De esta forma, se articuló un juego de tensiones y mutuos condicionamientos. El respaldo que el Estado brindó a los reclamos obreros se conjugó con llamados a la disciplina y la productividad y con la declaración de ilegalidad de medidas de fuerza, particularmente las vinculadas con las exigencias de despidos del personal jerárquico y administrativo de las fábricas. La declaración de “rebeldía improcedente” con la que en 1946 la DRSTyP calificó la huelga del ingenio Florida, para oponerse al traslado del mayordomo, constituye una evidencia en este sentido.

Frente la protestas de los sindicatos de base y la multiplicación de negociaciones que se propagaron por las fábricas azucareras, capitalizando la

²⁶ *La Gaceta*, 26 de septiembre de 1945.

²⁷ *La Gaceta*, 24 de abril de 1946.

²⁸ *Trópico*, 29 de julio de 1948.

estructura descentralizada del sindicalismo, la dirigencia de FOTIA encabezó las demandas vinculadas al cumplimiento de los decretos nacionales y la defensa de las reivindicaciones salariales. En este contexto, en mayo de 1945 la Federación decidió la primera huelga general en toda la provincia y facultó al secretario directivo a efectivizarla cuando lo considere necesario. La declaración se hacía como instancia de presión para “agotar los recursos legales para solucionar el conflicto” que enfrentaba a obreros con cañeros e industriales por la falta de observancia del decreto N° 678. La Federación argumentó que los empresarios obstruían

“la obra de recuperación social emprendida por el Superior Gobierno de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y su digno representante, el Primer Trabajador Argentino, coronel don Juan D. Perón, [dado que] no cumplen las leyes y decretos que sustraen a los obreros de la esclavizante situación en que fueron mantenidos”.²⁹

El 13 de octubre de 1945 la FOTIA declaró por segunda vez la huelga general. Días después diversas columnas obreras del interior de la provincia marcharon a la capital para colmar, desde la noche del 16 de octubre, la plaza Independencia y exigir la liberación de Perón. Paro y movilización se articulaban “para rescatar al impulsor y garante de las transformaciones sociales”, pues los obreros azucareros tenían la “clara intención de defender las conquistas alcanzadas, que la detención de Perón parecía poner en peligro” (Rubinstein, 2006, p. 54). Después de la liberación, FOTIA se convirtió en un bastión clave en la formación del partido laborista en Tucumán, que en las elecciones de febrero de 1946 obtuvo el 70,6% de los votos. De allí en más, la Federación obrera se atribuyó “la facultad de representación de las fuerzas peronistas provinciales”, procuró imponer candidaturas y avanzar en los espacios partidarios (Rubinstein, 2003, p. 332).

En enero de 1946 la FOTIA declaró el paro total de actividades en reclamo del cumplimiento del decreto N° 33.302 que estipulaba el pago de aguinaldo para todo “empleado u obrero permanente, provisorio, transitorio o accidental o supletorio que durante el año 1945 haya trabajado cualquier tiempo”.³⁰ Industriales y obreros se reunieron con el Interventor provincial, unos para exigir el pago de aguinaldo y otros para manifestar la imposibilidad de poder cumplir con el nuevo derecho. El interventor provincial ofreció gestionar el apoyo económico de las autoridades nacionales para dar cumplimiento al reclamo obrero, bajo este compromiso FOTIA decidió levantar la huelga.

²⁹ Schleh, Emilio: *Compilación legal*, t. XI, p. 427.

³⁰ Schleh, Emilio: *Compilación legal*, t. XI, p. 516.

Finalmente, en febrero, el gobierno nacional asumió el compromiso económico que permitió hacer frente al nuevo derecho laboral.

Como vimos, a lo largo de 1947 y 1948 la conflictividad obrera no cedió, reclamos relacionados con el despido del personal jerárquico y la pretensión de incidir en la organización de los procesos laborales desataron múltiples paros en los ingenios. Muchas de las protestas fueron contrarrestadas con la declaración de su ilegalidad, situación que alcanzó su punto álgido en septiembre de 1946 cuando Manuel Parés presentó su renuncia como Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Argumentó la imposibilidad de seguir desempeñando sus funciones de conciliación en medio de la indisciplina obrera y “sugirió que los conflictos en los ingenios debían ser llevados al secretariado de la FOTIA para que después de agotarse la tramitación legal dispuesta [...] se planteen con carácter definitivo”.³¹ En este contexto, los reiterados cuestionamientos de los sindicatos de ingenio a la figura de Parés impulsaron a la dirigencia fotiana a declarar una huelga general por tiempo indeterminado en apoyo a su gestión, medida que se concretó el 5 de octubre de 1946 y reveló otra arista de las tensiones entre las bases, los líderes de la Federación y el representante de la agencia estatal (Gutiérrez, 2012).

En síntesis, la dinámica de la conflictividad obrera, anclada en la estructura descentralizada de la Federación, permite reflexionar sobre varios problemas. En primer lugar, nos invita a repensar la redistribución del poder fabril en favor de los obreros. En efecto, esta transferencia de poder empujó los límites de los reclamos de los trabajadores y quebró la autoridad patronal. De esta forma, se subvirtieron los códigos de deferencia y las tácitas fronteras que delimitaban aquello que los “de abajo” podían expresar, demandar o discutir con los industriales. Asimismo, los conflictos nos interpelan a reflexionar sobre cómo las “instancias de representación de base permitían generar y sostener conflictos desde la base, superando a las dirigencias” (Basualdo, 2010, p. 88), lo que podría explicar la tensión entre la protesta abierta de los sindicatos de ingenio y la postura de la dirigencia fotiana, que mostró mayor disposición a la negociación y procuró encauzar las demandas a través de instancias de conciliación. Por último, en lo que respecta al Estado peronista la efervescencia obrera lo confrontó con las tensiones de su propia naturaleza, es decir, lo obligó a conciliar su desafiante fuerza, inherente al carácter de movimiento social, con los requerimientos propios de su condición de poder estatal (James, 2005, pp. 46-47). En tal sentido, la transferencia y construcción del poder obrero en las fábricas azucareras confrontó al Estado con los límites de lo

³¹ Schleh, Emilio: *Compilación legal*, t. XI, p. 538. También remitimos a *La Gaceta*, 20 de septiembre de 1946 y 1 de octubre de 1946.

aceptable, situación que lo obligó a acotar las inéditas y desafiantes prerrogativas de los trabajadores. La ilegalidad con que la DRSTyP respondió a muchas de las huelgas, destinadas a incidir en la contratación o despido del personal o intervenir en los procesos productivos, sintetiza este dilema constitutivo del peronismo.

3.2. La intervención de FOTIA (1949-1955)

La “huelga larga” de 1949

Entre mediados de 1948 y fines de 1949 la industria azucarera atravesó por una compleja coyuntura que derivó en una huelga general y culminó con la intervención de la Federación obrera. En julio de 1948, el arrastre de un bienio de malas cosechas y el incremento de los costos productivos se conjugó con la presentación de dos petitorios fotianos que reclamaban una suba salarial del 50% para los obreros y una amplia gama de reivindicaciones, particularmente destinada a los de surco.

La dilación en el tratamiento de los petitorios llevó a la FOTIA a declarar, a principios de septiembre de 1948, la huelga general. Sin embargo, como en otras ocasiones, su principal preocupación se encauzó a la búsqueda de interlocutores gubernamentales. En este caso, los diputados nacionales de origen azucarero, Manuel Lema y Luis René Villacorta, viajaron a Buenos Aires para solicitar la intermediación de Eva Perón y Hugo Mercante, Director Nacional de Trabajo y Acción Social. Finalmente, desde el entorno más cercano al Presidente se intimó a los obreros a reanudar sus tareas, recomendación que fue acatada por el sindicalismo azucarero. De esta forma, la Federación recuperaba el reclamo obrero pero preservaba la vía institucional en la formulación de demandas y observaba lo dispuesto por el gobierno nacional. La vuelta al trabajo, alentada por la promesa gubernamental de satisfacer las reivindicaciones, expresaba la postura de una dirigencia que reconocía los límites de la confrontación con el Estado nacional.

En noviembre de ese año, la FOTIA hizo público otro petitorio en el que volvió a solicitar aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Finalmente, en febrero de 1949 se acordó una suba salarial del 20%. Lejos de mitigar el malestar, este aumento escindió al sindicalismo entre aquellos proclives a endurecer la posición de la Federación y otros que, desde un lugar de mayor conciliación, pretendían postergar una confrontación con el Estado peronista (Rubinstein, 2006, p.132).

La coyuntura se agudizó con los despidos que asolaron a la agroindustria. Al cierre del ingenio Esperanza, en octubre de 1948, le siguieron

a principios del año siguiente una serie de despidos en masa, medida asumida por diversos industriales para atenuar el incremento de los costos productivos. Este problema reeditó las tensiones sindicales. El ala negociadora de la FOTIA, que tenía su proyección en la Legislatura provincial, concretó una reunión con Perón y regresó decidida a acatar la sugerencia presidencial, es decir, el uso de la vía legislativa provincial.³² En tal sentido, los legisladores procuraron resolver el problema de los despidos a través de proyectos de ley pero la falta de consenso, la urgencia de la situación y la decisión de la dirigencia fotiana de endurecer el reclamo concluyó con la declaración de una huelga general por tiempo indeterminado, medida concretada el 7 de marzo de 1949.

La deliberación en torno a los despidos obreros se depositó en el Consejo Económico Nacional y se concretó con la abierta hostilidad de la Federación, que decidió no acatar el pedido de la STyP de levantar la huelga mientras el Consejo gestionaba la solución del problema laboral. De esta forma, FOTIA rompía con su opción institucional, acercándose a la postura beligerante sostenida por las bases. Finalmente, el 23 de marzo, se acordó que los industriales podían realizar despidos individuales, en tanto que los masivos debían informarse previamente al Consejo.

Sin embargo, los niveles de conflictividad y tensión no cedieron. Esta coyuntura coincidió con la crisis de la balanza de pagos, el deterioro de los términos del intercambio de los productos agropecuarios y un profundo déficit presupuestario. En octubre de 1949, FOTIA volvió a insistir con los aumentos salariales. Una delegación obrera viajó a Buenos Aires y sostuvo entrevistas con Eva Perón y distintos funcionarios. Finalmente, el gobierno nacional ofreció un aumento salarial del 18% que fue tildado de insuficiente y condujo a la Federación a declarar, el 14 de octubre, una huelga general por tiempo indeterminado. A fin de mes, el Director Nacional de Trabajo y Acción Social declaró ilegal el paro por considerar que “sin que mediaran causas que lo justifiquen y sin haberse interrumpido las negociaciones” FOTIA había paralizado las actividades productivas.³³ Días más tarde, se anunció la intervención de la organización obrera más importante del norte argentino, situación que se mantuvo hasta 1955. Como contrapunto, la intransigencia de esta decisión fue compensada con un incremento salarial del 60% (Gutiérrez y Rubinstein, 2013).

³² Entre 1946 y 1950, Mackinnon reconoce once diputados provinciales de origen explícitamente obrero o que tienden a defender posiciones obreras. En lo que hace al bloque de senadores, entre nueve y once son obreros o defienden posiciones vinculadas a esos intereses. Por tanto, señala que “en Tucumán la FOTIA o los legisladores de origen obrero componen la mayoría de la legislatura” (Moir Mackinnon, 2003, pp. 95-96).

³³ Schleh *Compilación legal*, T. XIII, 2º parte 157.

En síntesis, cuando FOTIA revirtió su postura negociadora e institucional, que la había conducido a desautorizar muchas de las acciones de las bases, el Estado le marcó, con inusitada fuerza, los límites de esa forma de demandar. Siguiendo a Daniel James, el desenlace de la huelga de octubre de 1949 puede interpretarse “como un intento por institucionalizar y controlar el desafío herético que había desencadenado [el peronismo] en el periodo inicial y por absorber esa actitud desafiante en el seno de la nueva ortodoxia patrocinada por el Estado” (James, 2005, p. 51). En este contexto, interpretar la intervención de la Federación también supone recuperar la profunda conflictividad de los sindicatos de base y el desborde permanente de los canales de negociación impulsados por el gobierno y la DRSTyP. Desde 1947, la Delegación Regional subrayaba la necesidad de revertir el carácter descentralizado de FOTIA, en tanto constituía el principal impulsor de la “indisciplina obrera”. En este contexto, no fue casual que desde 1950 el objetivo más destacado de las autoridades de la intervención en FOTIA y el más resistido por las bases fuera avanzar en el proceso de centralización de la estructura sindical azucarera.

También hay que señalar que la intervención de FOTIA fue parte de un conjunto de intervenciones motivadas por la negativa de los sindicatos a poner fin a una huelga (textil, bancarios, estibadores, panaderos, marítimos, entre otros), decisión que reflejó la menor tolerancia del gobierno hacia las huelgas y la profundización del rol disciplinario de la Confederación General del Trabajo (CGT). Este proceso “tuvo, en definitiva, dos consecuencias principales: aumentar la influencia del gobierno sobre los sindicatos y reducir los canales para la rendición de cuentas de los dirigentes frente a los trabajadores afiliados” (Doyon, 2006, p. 369). Como analizaremos a continuación, la CGT puso en marcha un proceso de centralización destinado a recortar la autonomía de los sindicatos de base y asegurar la continuidad de una dirigencia más cooperativa y responsable frente a las necesidades y ritmos de la coyuntura histórica (Doyon, 2006, p.302). Este proceso, que se extendió hasta la caída del gobierno peronista en 1955, reeditó las tensiones entre la dirigencia de FOTIA, en este caso las autoridades de la intervención, y los sindicatos, que resistieron los embates para preservar la autonomía con la que habían nacido.

El difícil proceso de normalización fotiano: la resistencia de los sindicatos

La Confederación General del Trabajo (CGT) fue la encargada de llevar adelante la intervención del sindicalismo azucarero, decisión cuyo norte fue articular un proceso de centralización para recortar las prerrogativas de los sindicatos de base (declaración de huelga, disposición de su caja social, atribuciones disciplinarias, prerrogativas para reformar el estatuto, etc.). Este derrotero –que se extendió de 1949 a 1955– recuperó en, una clave diferente,

las tensiones entre la dirigencia de FOTIA y los sindicatos de fábrica y surco, que intentaron resistir la centralización promovida por la CGT en procura de preservar su autonomía, sin desconocer que, a pesar de los mayores niveles de subordinación política, “la alianza con el peronismo era la única alternativa realista abierta al movimiento sindical” (Doyon, 1984, p. 221).

Más allá de las disidencias provocadas por el proceso de normalización, desde 1950 asistimos a un marcado descenso de la conflictividad obrera. Distintas variables explican esta situación que se repitió en diversas ramas productivas de la economía nacional. Por un lado, no se puede obviar “que el mundo del trabajo había atravesado un periodo de rápidos cambios, durante el cual vio realizada una gran parte de sus demandas prioritarias”. Por tanto, la disminución de huelgas no debe equipararse con la disminución de la capacidad de los trabajadores de articular demandas, más bien debe contemplar la gravitación que las experiencias de reivindicación laboral y conquistas sociales tuvieron en el mundo del trabajo. Asimismo, la afirmación de los mecanismos de mediación del Estado, en particular el poder que adquiere a partir de 1948 la Secretaría de Trabajo, constituye un vértice para comprender las causas del descenso de la conflictividad obrera (Doyon, 2006, p. 294).

Además de estas variables, en el caso tucumano, no se pueden soslayar las implicancias de la intervención de la CGT en la Federación, decisión política que avanzó, no sin resistencias, en el disciplinamiento del sindicalismo azucarero. El control e intervención de los sindicatos de base y la postura de la intervención, enrolada en el nuevo posicionamiento de la central obrera, que transitó de su papel mediadora entre los sindicatos y el Estado a un papel de ejecutora de las políticas gubernamentales en el movimiento obrero, también ayudan a explicar el descenso de los conflictos. Asimismo, no se debe descartar que las autoridades de la intervención en el sindicato azucarero asumieran los reclamos laborales y, valiéndose de su directa vinculación con el Estado peronista, canalizaran las demandas obreras y evitaran la declaración de medidas de fuerza.

Ahora bien, la decisión de poner fin a la intervención e iniciar la reorganización de FOTIA, que comenzó en diciembre de 1951, desató un dilatado y complejo proceso interrumpido por el golpe de Estado que, en septiembre de 1955, derrocó a Juan D. Perón. La primera medida de las autoridades de la CGT fue que los sindicatos de base convoquen a elecciones para conformar sus comisiones directivas y designar al delegado que actuaría en el Congreso encargado de resolver un tema clave: discutir la nueva carta orgánica del gremio azucarero impulsada por la central obrera. Finalmente, en

mayo de 1952 se realizó el Congreso, la primera objeción de los representantes de las filiales fue el cambio de denominación sugerido, en tanto FOTIA pasaría a llamarse Asociación Tucumana de Trabajadores de la Industria Azucarera. Detrás del nuevo nombre subyacía la transformación de los sindicatos de base en delegaciones, lo que suponía avanzar en el proceso de centralización y, por ende, abandonar el carácter federativo con el que había nacido el sindicalismo azucarero. A decir de las autoridades, la autonomía de los sindicatos de fábrica y surco había conducido al mutuo desconocimiento de los problemas obreros y supeditado la solución de los conflictos laborales según “la mayor o menor capacidad de los dirigentes y la menor o mayor buena voluntad de las distintas patronales”. Por tanto, la nueva estructura organizativa permitiría que las soluciones emanen de un cuerpo central, evitando las desigualdades entre las filiales (Gutiérrez, 2012).

A sólo un día de las sesiones, el Congreso fue suspendido, las autoridades alegaron que la discusión del nuevo estatuto no podía realizarse por la inasistencia de muchos delegados. Podemos suponer que la dificultad para consensuar el nuevo proyecto estatutario, especialmente en lo referido al recorte de facultades en los sindicatos, motivó la ausencia de los representantes y, como veremos, se convertiría en el mayor obstáculo que tuvo que vencer la intervención.

Nuevamente, a principios de 1953 las autoridades de la intervención decidieron convocar un Congreso extraordinario para tratar el nuevo estatuto de FOTIA. Otra vez, la discusión del cambio de denominación provocó una álgida disputa entre los delegados y el interventor de la Federación que impulsó la declaración de un cuarto intermedio y la conformación de una comisión que viajaría a Buenos Aires para tratar con la CGT el motivo del disenso. Más allá de las protestas y gestiones, el secretariado de la central obrera no cedió en su apuesta por la centralización del sindicalismo azucarero y el Congreso reanudó sus actividades en marzo para, finalmente, aprobar un nuevo estatuto que habilitaba la transformación de FOTIA en un organismo central con seccionales, normativa que se giró al Ministerio de Trabajo y Previsión, encargado de supervisar el nuevo régimen asociativo.

En junio de 1954 el interventor convocó a los delegados de las filiales a un Congreso extraordinario, con el propósito de discutir algunos puntos del estatuto que habían sido observados por el Ministerio. Nuevamente, la observación más cuestionada fue la vinculada a las “comisiones ejecutivas” de cada seccional o delegación (es decir, los sindicatos de base), que debían cambiar su denominación por la de “comisiones administrativas”, en tanto una entidad no podía funcionar con más de un cuerpo ejecutivo, “que en el caso de

la FOTIA es el consejo central”. De esta forma, las controversias que habían signado desde 1951 el proceso de normalización se reeditaron, en palabras del representante del ingenio San Juan este cambio de denominación “implicaba disminuir aún más la autonomía de los sindicatos que formaron la FOTIA, ahora transformados en seccionales de una central”.³⁴

Finalmente, en octubre de 1954 el Ministerio de Trabajo aprobó la nueva carta orgánica de FOTIA. El nuevo estatuto habilitaba la actuación de la “FOTIA –Asociación Tucumana de Trabajadores de la Industria Azucarera”– como sindicato que agrupaba a los obreros y empleados de ambos sexos de la industria azucarera tucumana.³⁵ De esta forma, FOTIA perdía su tradicional configuración federativa para avanzar por la senda de la centralización, ampliaba el espectro de afiliados al dar cabida a los empleados (segmento que desde 1945 estaba agremiado en la Federación de Empleados de la Industria Azucarera) y a los trabajadores “de ambos sexos”, formulación que promovía la incorporación de mujeres al asociacionismo azucarero.

En el nuevo organigrama los sindicatos de base pasaban a constituir “comisiones administrativas seccionales”, dependientes directamente del Consejo Directivo. Este último se arrogaba cuatro facultades clave, antes en poder de los sindicatos de base: fijaba el porcentaje pecuniario que recibía cada comisión para sus gastos de funcionamiento; aceptaba o rechazaba las solicitudes de ingreso de socios; tenía la facultad de legalizar las comisiones administrativas, así como de intervenirlas “a los efectos de su reorganización y correcto funcionamiento” y podía apercibir, suspender o expulsar de la asociación a todo socio que ostente “mala conducta”.³⁶ Por su parte, se estipulaba que las atribuciones de las comisiones consistían en fiscalizar que la patronal cumpliera con las disposiciones de la Ley de Asociaciones Profesionales, hacer respetar las disposiciones del Consejo Directivo, convocar a elecciones dentro de su jurisdicción y velar por el cumplimiento de los estatutos y la disciplina societaria. De esta forma, se desvanecía la autonomía de los sindicatos de base que, transformados por el nuevo estatuto en “comisiones administrativas” dependientes del Consejo Directivo, resignaban sus facultades (Gutiérrez, 2012).

La aprobación de la nueva carta orgánica de FOTIA supuso un sustancial avance en la normalización sindical que debía continuar con las elecciones de las comisiones administrativas y la conformación del Consejo Directivo pero este proceso fue abruptamente clausurado por el golpe de

³⁴ *La Gaceta*, 29 de junio de 1954.

³⁵ *La Industria Azucarera*, febrero de 1955, nº 736, p. 84.

³⁶ *La Industria Azucarera*, febrero de 1955, nº 736, p. 84 y 90.

Estado que, en septiembre de 1955, marcó el fin de la segunda presidencia de Perón.

Cuestiones de género en clave azucarera

Como analizamos en los capítulos anteriores, el mundo del trabajo azucarero fue modelado por el ritmo “periódico y regular” de la zafra extendido entre los meses de mayo y octubre. En tal sentido, la estacionalidad de las labores y la complementariedad de las tareas de fábrica y de surco, propias de la condición agroindustrial azucarera, diferenciaron al conjunto obrero en función de las relaciones contractuales (permanentes o temporarios) y los lugares de trabajo (fábrica o cañaveral). En 1946 la zafra ocupó 130.181 obreros, cifra compuesta por 20.000 trabajadores de fábrica (entre permanentes y transitorios) y 110.181 braceros dedicados al cultivo y la cosecha de la caña (38.399 permanentes y 71.782 temporales). Estos números grafican el peso de los trabajadores de surco, particularmente de la mano de obra temporal que llegaba para la zafra, frente al restringido universo de los obreros permanentes de fábrica, quienes disfrutaban de una mayor estabilidad y mejores condiciones socio-laborales.

El testimonio de Manuel Parés, quien se desempeñaba como segundo jefe mecánico del ingenio Mercedes y llegó a ser Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, nos devuelve la fuerza de las disímiles condiciones socio-laborales azucareras, así como su proyección en términos materiales y simbólicos, contrastes que distanciaba a los fijos de los temporales.

“Nosotros teníamos otra clase de trato. No éramos los obreros de los cercos [...] Claro, decían: “como ellos trabajan todo el año”. Eso siempre decían. Eran situaciones económicas muy diferentes, nosotros vivíamos en casas con luz eléctrica y ellos en casitas de malhoja [...] Yo he sido privilegiado se puede decir [...] Estaba invitado a todos los casamientos de los directores de la fábrica, las hijas se casaban y yo estaba siempre invitado”.³⁷

Como vimos, el obrero permanente fue el referente y depositario de importantes derechos laborales desplegados por el peronismo, que el sindicalismo procuró extender al resto del conjunto obrero. Podríamos decir que el trabajador estable fue el sujeto de derecho por excelencia. Como vimos, en junio de 1946, un decreto presidencial definió la categoría de permanente,

³⁷ Entrevista a Manuel Parés, en Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo *El primer peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas*, 2012, p. 314.

esta exclusiva franja era la que accedía a la mensualización, a los incrementos salariales en función de la antigüedad y al salario familiar (por cada hijo legítimo hasta los 14 años). Los niveles de especialización requeridos y el condicionante del matrimonio civil restringían el usufructo de estos derechos a un segmento acotado del mundo laboral. En un universo signado por una abrumadora mayoría de obreros temporales y peones sin calificación y en un contexto social definido por las uniones informales, el peronismo modeló al trabajador ideal anudando pautas morales con exigencias laborales. Esta mixtura proyectó un imaginario cuyo referente era el obrero cualificado, padre de familia y trabajador estable (Bravo y Gutiérrez, 2012, p. 5). Las implicancias de esta figura estaban en sintonía con tradicionales percepciones y preocupaciones patronales. En efecto, la asunción de responsabilidades familiares, devenidas del matrimonio, históricamente fue percibida como una variable que reforzaba el compromiso con la fuente de trabajo y, por ende, podía atenuar el involucramiento de los obreros en la protesta.

Con el propósito de extender a otros trabajadores los derechos asociados a la condición de permanente, la dirigencia fotiana interpelló los decretos presidenciales y procuró flexibilizar los criterios que definían el acceso a ciertos beneficios sociales. En tal sentido, en 1947 la Federación logró un incremento del salario familiar y la extensión del escalafón (aumento salarial con base en la antigüedad laboral) a “todos los obreros permanentes de fábrica y a los obreros permanentes jornalizados de la agricultura”. La antigüedad, no así los requisitos, para acceder a la mensualización se redujo a cinco años. A través de un extenso petitorio, en julio de 1948 la FOTIA profundizó sus exigencias al demandar la ampliación de la condición de permanente a distintos oficios y especialidades no contempladas en el decreto de 1946 (engrasadores, capataces, maquinistas, motoristas, porteros, serenos, cosedor de bolsas, entre muchos otros), así como para el “obrero raso” que haya cumplido un mínimo de 15 años de antigüedad. Infructuosamente, la Federación procuró escindir la calificación de la adquisición de los derechos laborales con el fin de democratizar la condición de permanente. Los aumentos salariales con base en la antigüedad también intentaron extenderse a todos los obreros, tanto a jornal como a destajo, y a los temporarios.

Por su parte, la permanencia laboral intentó conquistarse de múltiples formas. En este contexto, como vimos, la implementación y negociación del escalafón se convirtió en una estrategia clave para la consecución de este fin. Por ello, los sindicatos de base presionaron para intervenir en las reubicaciones y ascensos laborales que garantizaban, para ciertas especialidades y para la condición de medio oficial en adelante, no sólo mejores remuneraciones, sino

el acceso a derechos laborales (salario familiar, mensualización, incremento salarial con base en la antigüedad).

Si bien entre los permanentes existían diferencias, la condición de los trabajadores de fábrica siempre fue más estable que la de sus pares de surco, los niveles de cualificación y la mayor dependencia de los industriales de sus labores incidieron en esta situación. En tal sentido, la condición de permanencia en el surco fue más vulnerable e intentó ser evadida por la patronal, a pesar de que la legislación precisaba la obligación de los industriales y cañeros de “proporcionar trabajo, dentro o fuera del cañaveral, a sus trabajadores agrícolas permanentes veinte días por mes en promedio durante los meses de marzo, abril y mayo”, es decir, en la temporada previa a la zafra.³⁸ En este contexto de preocupaciones, en diciembre de 1951, Silvestre Juárez, obrero del departamento de Leales, le escribió a Perón para solicitarle “que cuando la patronal no realicen los veinte días de trabajo pedimos que se dicte una lei favorable ha nosotros obreros de los cañeros independientes y se mande a pagar los días no realizados en el mes por culpa de la patronal”.³⁹

En lo que atañe a los permanentes, una recurrente reivindicación fue la de transmitir su condición laboral a los hijos mayores de catorce años, tópico recuperado en el pliego de 1948. Esta exigencia desdibujaba el criterio de antigüedad y cualificación en favor de una variable de carácter transitivo que legaba a los hijos la condición contractual del padre. La pretensión de garantizar la inserción productiva de la prole y los derechos inherentes a la misma se vinculaban no sólo con la preservación de la fuente de trabajo y los derechos laborales, sino con la necesidad de conservar la vivienda, beneficio otorgado a los obreros permanentes (Bravo y Gutiérrez 2012 y Gutiérrez, 2016).

En esta tónica de preocupaciones, en 1954 la FOTIA logró una victoria parcial. El convenio colectivo de ese año fijó que, en caso de vacantes obreras, la patronal privilegiaría “en igualdad de condiciones, a los hijos de los obreros permanentes, fallecidos, jubilados o incapacitados”. Como en otros espacios laborales, cuya mano de obra era eminentemente masculina, la reivindicación que hacía foco en la ocupación de los hijos varones revelaba la ideología del varón proveedor, del obrero como garante de la manutención familiar. En efecto, la definición del trabajo fabril como una labor masculina circunscribió la responsabilidad de la supervivencia familiar a los hombres y fue recuperada por el sindicalismo.

³⁸ Schleh, Emilio *Compilación legal*, tomo XI, cit., p. 171.

³⁹ AGN, Secretaría Legal y Técnica, caja 43, exp. 13640.

En esos mundos jerárquicos y masculinos que eran las fábricas, el único oficio que incorporó a mujeres fue el de “cosedor de bolsas”, labor asociada a las tareas realizadas por ellas en sus hogares. En tal sentido, es posible pensar que esta inserción productiva se vivenciara como una prolongación, una proyección que no cuestionaba las coordenadas del patriarcado azucarero y la tradicional división del trabajo que confiaba a las mujeres la realización de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Así, en las fábricas azucareras, como en muchas otras industrias, la segregación laboral y espacial de las mujeres fue un denominador común enraizado en una cosmovisión donde ciertas “habilidades están asociadas a la ‘naturaleza’ y no se las piensa como el resultado de una conjunción de factores políticos-culturales” (Lobato, 2007, p.87).

Sin embargo, fuera de la fábrica, las mujeres se vinculaban de diversas formas con el mundo laboral para contribuir a la economía familiar. Lucía Mercado recuerda que en el ingenio Santa Lucía, lavaban las bolsas de arpillera usadas para envasar el azúcar, se reunían en una acequia y “a golpes y cepillos las limpiaban, las enjuagaban y las ponían a secar en un alambrado.” También realizaban tareas domésticas en el *chalet* de los propietarios, las casas del personal jerárquico, las oficinas de la administración y el hospital; preparaban y vendían comida; cocinaban, lavaban y planchaban la ropa de los empleados solteros y “los atisbos profesionales” se expresaban en el anhelo de ser peluqueras, costureras o enfermeras (Mercado, 1999, p. 91 y 122).

En la esfera agrícola, signada por el trabajo temporal, las relaciones de género se expresaron de otra forma. La familia obrera que llegaba para la zafra de las provincias vecinas (particularmente de Santiago del Estero y Catamarca) y del Valle Calchaquí eran “gente humilde, callada, muy sacrificada, hasta sometida”, braceros que “se sabían el último orejón del tarro en una escala industrial y social” (Mercado, 1999, p. 88). La paga para los peones temporales era a destajo, es decir, por cantidad de caña hachada, pelada y cargada sobre el carro o la zorra y si bien el contrato laboral se realizaba con el varón de la familia, las mujeres y los niños colaboraban activamente en las tareas agrícolas para completar la tonelada de caña. Así, el trabajo femenino agrícola, subsumido en la figura del varón, profundizó formas de dominación masculina en los hogares campesinos y reforzó la dependencia de las mujeres del núcleo familiar y la pareja (Campi y Bravo, 1995, pp. 153-160). De esta forma, la exclusión contractual de la mujer reforzó las nociones paternalistas del agro azucarero.

Finalmente, cabe subrayar que en una industria cuya mano de obra era eminentemente masculina, la apelación a la condición de “padre” legítimo

muchas demandas obreras, convirtiéndose en un argumento clave para interpelar al Estado y a la patronal. En tal sentido, apelando a su condición de padres de familia, los obreros demandaron mejores condiciones laborales y de trabajo para sus hijos (Gutiérrez, 2016). Por ejemplo, en el petitorio de septiembre de 1944, FOTIA denunciaba el estado de miseria y explotación en el que vivían los obreros, cuya expresión más drástica se encarnaba en sus hijos “que desde muy tierna edad son entregados al trabajo [...] desarrollándose tan desnutridamente que el alto porcentaje de incapacidad para servir en el ejército, lo dice elocuentemente”.⁴⁰ En diciembre de 1951, el obrero de surco Manuel Eloy Farías, del ingenio Bella Vista, le escribió al presidente de la nación, para exponer la situación de los hijos menores a quienes los industriales le quitaban el “derecho de trabajar” y únicamente los contrataban como cosecheros durante la zafra. Farías le explicaba que

“los otros 8 meses los dejan sin trabajar para poder ganar el pan y vestirse abiendo enque les den trabajo en tiempo de cultivo nosotros los padres viejos ya y desbalido tenemos que trabajar para vestirlos cuando nosotros pensábamos tener alluda de nuestros hijos no la encontramos. Yo soy padre de 5 hijos barones 2 de ellos pueden ayudarme a trabajar para sostener nuestro ogar pero no lo asen por falta de trabajo”.⁴¹

En síntesis, las implicancias de género en la esfera azucarera se proyectaron de diversas maneras pero, tanto en la fábrica como en el surco, el trabajo se definió como una labor eminentemente de varones. Esta realidad coadyuvó a configurar una cultura patriarcal que invisibilizó las múltiples formas en que las mujeres asumieron y se insertaron en el mercado laboral. En los ingenios, la mayoritaria contratación de varones circunscribió la responsabilidad de la supervivencia familiar a los hombres, situación que forjó la dependencia de las mujeres respecto de la figura del varón proveedor y modeló su rol en estrecha asociación con el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. Por su parte, la particularidad de las faenas agrícolas, expresada en la exclusiva contratación del padre de familia, configuró un imaginario que asociaba a las mujeres con las responsabilidades domésticas y a los varones con el sostenimiento económico del hogar proletario (Gutiérrez, 2013 y 2016).

⁴⁰ Schleh, Emilio *Compilación legal*, tomo XI, cit., p. 290.

⁴¹ AGN, Secretaría Legal y Técnica, caja 275, exp. 11605.

4. Conclusiones

Los años treinta, particularmente desde mediados de la década, los trabajadores urbanos tucumanos articularon diversas estrategias para defender y ampliar sus derechos laborales (mitin, huelgas pero también la búsqueda de mediadores –especialmente funcionarios de gobierno– para canalizar sus demandas). En tal sentido, en una coyuntura de repunte económico, el fortalecimiento de la organización sindical, la mayor recepción de los gobiernos radicales frente a las demandas obreras y el convencimiento sobre el rol que el Estado debía cumplir en la esfera laboral incidieron en el protagonismo de la clase trabajadora. Una expresión de esta situación fue el renovado proyecto de conformar una organización de segundo grado que, al reunir a diversos sindicatos, fortaleciera las reivindicaciones y la capacidad negociadora de los trabajadores, empresa concretada con la fundación de la Federación Provincial de Trabajadores en 1936.

En la década de 1930, la vitalidad del movimiento obrero urbano contrastó con la debilidad e intermitencia de la organización laboral azucarera. La imposibilidad de fundar sindicatos en los ingenios, espacios marcados por la resistencia de la patronal y la débil presencia de las agencias estatales, debilitaron las demandas, las formas de protesta y postergaron el anhelo de unidad gremial. Esta situación se revertiría, a partir de 1944, con la multiplicación de sindicatos por la veintena de ingenios azucareros y la creación de FOTIA, convertida en el gremio más importante del norte argentino en el periodo analizado. Esta multiplicación, alentada por el Estado, abrevó en la experiencia de la clase trabajadora tucumana; en sus rutinas de explotación y postergadas reivindicaciones; en la trama asociativa que anarquistas, socialistas y comunistas desplegaron de forma intermitente a lo largo de medio siglo de proletarización; y en sus frustrados intentos de fundar sindicatos de base y crear una organización de segundo grado. Podemos pensar en esa particular coyuntura de principios de los años cuarenta como un punto de encuentro entre la experiencia obrera y el decidido avance estatal.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

Bibliografía

Basualdo, Victoria: “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 1943-2007”, en Azpiazu, Daniel, Martín Schorr y Victoria Basualdo: *La industria y el sindicalismo de base en la Argentina*, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2010, pp. 81-157.

Ben Altabef, Norma y Alejandra, Landaburu: “Las trabajadoras a domicilio: la huelga de las costureras en Tucumán, 1936”, en *Actas de las III Jornadas de Historia de las Mujeres*, Rosario, Centro Interdisciplinario sobre las Mujeres, Universidad Nacional de Rosario, 1995, pp. 237-248.

Bravo, María Celia y Gutiérrez, Florencia “Sindicalismo azucarero y género. Tucumán durante el primer peronismo”, ponencia presentada en *Congreso Latinoamericano de Historia de las Mujeres*, Buenos Aires, ISHIR-CONICET, UNSAM, IADES, septiembre de 2012.

Bravo, María Celia y Florencia Gutiérrez: “La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949), *H-Industria*, nº 14 (8), 2014, pp.153-185.

Campi, Daniel y María Celia Bravo: “La mujer en Tucumán a fines del siglo XIX. Población, trabajo y coacción” en Teruel, Ana (comp): *Población y trabajo en el noroeste argentino, siglos XVIII y XIX*, Jujuy, UNIHR – Universidad Nacional de Jujuy, 1995, pp.143-170.

Doyon, Louise: “La organización del movimiento sindical peronista, 1946-1955”, en *Desarrollo Económico*, vol. 24, nº 94, pp. 203-234.

Doyon, Louise: “La formación del sindicalismo peronista”, en Torre, Juan Carlos (dir.): *Nueva Historia Argentina. Los años peronistas (1943-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Doyon, Louise: *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006.

Gutiérrez, Florencia. “La dirigencia de FOTIA y los sindicatos de base: tensiones y conflictos en el proceso de sindicalización azucarero. Tucumán, 1944-1955”, en Florencia Gutiérrez y Gustavo Rubinstein (coords.): *El primer*

peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas, Tucumán, EDUNT, 2012, pp. 133-169.

Gutiérrez, Florencia: “Desigualdad social, masculinidad y cualificación en el sindicalismo azucarero. Tucumán, 1944-1949”, *Anuario IEHS*, nº 28, 2013, pp. 59-75.

Gutiérrez, Florencia y Gustavo Rubinstein: “Alcances y límites de la autonomía sindical. La experiencia de la FOTIA durante el primer peronismo”, en Macor, Darío y César Tcach (eds.): *La invención del peronismo en el interior del país*, tomo II, Santa Fe, CEA - Universidad Nacional del Litoral, 2013, pp.245-283.

Gutiérrez, Florencia: “La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1955”, *Quinto Sol*, vol. 18, nº 2, 2014, pp.135-157.

Gutiérrez, Florencia: “Las demandas del sindicalismo azucarero: entre la protesta abierta y las instancias de conciliación. Tucumán, 1944-1949”, *Trashumante*, nº 6, 2015, pp.104-125.

Gutiérrez, Florencia: “Clase y masculinidad en la construcción de derechos laborales y la división del trabajo azucarero. Tucumán durante el primer peronismo”, en Andújar, Andrea, Laura Caruso, Florencia Gutiérrez, Silvana Palermo y Valeria Pita y Cristiana Schettini: *Vivir con lo justo. Estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género Argentina, siglos XIX y XX*, Rosario, Prohistoria, 2016, pp.131-154.

Horozwitz, Joel: “El movimiento obrero”, en, Cattaruzza, Alejandro: *Nueva Historia Argentina. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 239-282.

James, Daniel. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Siglo XX editores, 2005.

Landaburu, Alejandra: *Los empresarios azucareros y la cuestión social. Tucumán, 1904-1930*, Tesis de doctorado, Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2013.

Lobato, Mirta: *Historia de las trabajadoras en la Argentina, (1869-1960)*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

Mackinnon, Moira: "El protagonismo del movimiento obrero tucumano en la formación del Partido Peronista (1945-1950)", en Sergio Grez Toso, Francisco Zapata y Moira Mackinnon: *Formas tempranas de organización obrera*, Buenos Aires, Instituto Di Tella, La Crujía, 2003, pp. 93-121.

Mercado, Lucía: *El Gallo Negro. Vida, pasión y muerte de un ingenio azucarero*, Producciones Gráficas, Tucumán, 1999.

Piliponsky, Esteban: "Autonomía y estatización. Rupturas en el sindicalismo tucumano frente al fenómenos peronista", en *Historia Regional, Sección Historia*, ISP, n 3, año XXIV, nº 29, 2011, pp. 97-122.

Piliponsky, Esteban: "¿Sindicatos fuertes con poder de negociación débil? Análisis del sindicalismo tucumano previo al surgimiento del peronismo", en *A contra corriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina*, vol. 10, nº 1, 2012, pp. 310-333.

Rubinstein, Gustavo, "El estado peronista y la sindicalización de los trabajadores azucareros", en Darío Macor y César Tcach (eds.): *La invención del peronismo*, Santa Fe, Universidad nacional del Litoral, 2003, pp. 319-363.

Rubinstein, Gustavo: *Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano*. Tucumán: Travesía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán, 2006.

Torre, Juan Carlos: *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Sudamericana - Instituto Torcuato Di Tella, 1990.

Ullivarri, María: "Trabajadores, Estado y política durante las gobernaciones radicales en Tucumán, 1935-1943", en *Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos Segreti"*, año 9, nº 9, 2009, pp. 303-321.

Ullivarri, María: *Trabajadores, sindicatos y política en Tucumán, 1930-1943*, Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2010.

Ullivarri, María: "Movimiento obrero y política en tiempos de guerra mundial. Tucumán, 1940-1943", en *Anuario IEHS*, nº 26, 2011 (a), pp. 131-161.

Ullivarri, María. "Sindicatos en la 'capital del azúcar'. Organización y lucha en el mundo del trabajo de la provincia de Tucumán (Argentina), 1930-1943". *Historia Agraria*, nº 55, 2011 (b), pp. 105-137.

Ullivarri, María: “Trabajadores, Estado y derechos. El Departamento Provincial de Trabajo tucumano durante la década de 1930”, en Lobato, Mirta y Juan Suriano: *Las instituciones laborales en la Argentina (1900-1955)*, Buenos Aires, Edhasa, 2013, pp. 155-176.

Ullivarri, María, “Del sindicato a la central obrera en una trayectoria de provincia: Tucumán en los años 30”, en *Revista Archivos*, año II, nº 4, marzo de 2014, pp. 123-143.

Fuentes

Entrevistas y testimonios

Testimonio de Carlos Aguilar sobre el gremialismo y el nacimiento de FOTIA, 1988, en Archivo Privado Ana María Aguilar,

Entrevista a Manuel Parés, en Gutiérrez, Florencia y Rubinstein, Gustavo *El primer peronismo en Tucumán. Avances y nuevas perspectivas*, Tucumán, EDUNT, 212.

Publicaciones oficiales

Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán, 1925-1943.

Memorias del Departamento Provincial de Trabajo, Tucumán, 1930-1941.

Publicaciones del empresariado azucarero

Schleh, Emilio: *Compilación legal sobre el azúcar*, tomo XI, Buenos Aires, Imprenta Ferrari, 1947.

Schleh, Emilio: *Compilación legal sobre el azúcar*, tomo XIII, primera parte, Buenos Aires, Imprenta Ferrari, 1950.

La Industria Azucarera (Tucumán)

Prensa

El Orden (Tucumán)

La Gaceta (Tucumán)

La Unión (Tucumán)

Trópico (Tucumán)